



Especial 8M

(4) UN CHILE QUE CRUJE:
El tsunami feminista
Aproximaciones al "8m" chileno

(16) HUELGA FEMINISTA COMO MOVIMIENTO ESTRUCTURANTE DE
TRANSFORMACIÓN POLÍTICO-ECONÓMICO-CULTURA

(34) ENTREVISTA A CINZIA ARRUZZA

(35) PUGNAS EMPRESARIALES, CRECIMIENTO Y DESAFÍOS GUBERNAMENTALES

(47) LA POLÍTICA MILITAR DE LA TRANSICIÓN Y LOS NUEVOS
DESAFÍOS DE LA DEFENSA NACIONAL

(60) MIGRACIÓN EN CHILE:
Notas para pensar el fenómeno desde la izquierda

(73) "CHALECOS AMARILLOS" EN FRANCIA:
Potencias y límites del descontento

Entrevistas

(81) CATALINA PÉREZ

(92) RODRIGO MUNDACA



CUADERNOS DE COYUNTURA



TRASTORNAR LA DEMOCRACIA

Fuente: eldesconcierto.cl

Las *fake news* (noticias falsas o desinformación en gran escala con fines políticos) es el concepto de moda entre los analistas de actualidad de todo el orbe. Una herramienta política que, hija pródiga de la vieja demagogia, tiene de novedad la sofisticación que para su empleo permiten las nuevas tecnologías. Unas que han dejado su huella en los principales resultados electorales del último tiempo (Brexit, Trump, Bolsonaro), estando incluso, para algunos, a la base de supuestas nuevas formas de gobierno contemporánea.

Como en todo, el presidente Piñera y su gobierno no han querido quedarse al margen, acercándose de modo reiterado a lo reñido con la verdad para obtener réditos políticos, especialmente en los últimos meses. Primero, por el tratamiento dado a la crisis venezolana, enorme tragedia del continente, en donde se ha transitado, tentando sin más la posibilidad de una guerra con un claro propósito de causar efectos en la política interna (recordando el episodio de “Chilezuela”), desde la propaganda hasta la irresponsabilidad política, privilegiando

el desafío permanente a la soberanía extranjera antes que las instancias que buscan una salida dialogada a la crisis, de las cuales Chile se ha restado. Una situación que, en otras materias, también se ha repetido. En educación, con una ministra Cubillos empujando varios aspectos de los proyectos “Aula Segura” y “Admisión Justa” a contramano de la evidencia acumulada en materia de educación escolar; o, en seguridad, primero con el Caso Catrillanca y, más tarde, con el retorno de la ley de control preventivo aplicada a menores, pasando por alto los acuerdos internacionales relacionados con la protección de la infancia suscritos por Chile.

Lo lógica, en todos los casos, ha sido la misma: más allá de la legítima intención de empujar un esfuerzo político propio contra la eventual oposición de otros, esto se ha hecho polarizando el escenario, sin importar la evidencia técnica, periódica o la propia coherencia. En definitiva, haciendo que la información falsa, más que como mentira que viabilice el acceso al poder, funcione como nebulosa de cualquier tratamiento racional a los problemas sociales y políticos, esto es, aquellos que pone sobre la mesa una sociedad que quiere ser escuchada por la política.

Una situación que se acrecienta, además, ante una oposición política desarticulada. En efecto, la periodicidad —y el mismo atrevimiento— en el uso de información falsa o mañosamente manipulada, emerge como un indicador del grado de esta desarticulación: puedes mentir todo lo que quieras sin que eso traiga aparejado un costo político. Uno que sólo se puede cobrar cuando se tiene fuerza social y política propia. Pero, también, cuando no se ha caído en lo mismo.

Sabido es que la razón de ser de la política no es la búsqueda de la verdad, sino la del poder. Objetivo para el cual prácticamente todas las formas terminan siendo válidas. No obstante, también se sabe que un avance de la política moderna, en oposición a sus expresiones previas, es que, haciéndose presente el problema de la legitimidad —esto es, de la búsqueda de un consenso mayoritario más allá del uso de la fuerza—,

las formas democráticas implican ciertas reglas del juego, que obligan a grados de veracidad racionalmente fundados por el bien de todo el sistema. Es lo que se llama un pacto y, valga recordar, es una conquista del movimiento popular de los últimos siglos. Es su derecho a definir su propio devenir de un modo racional, bajo formas que deben ser protegidas. Eso es lo que hoy parece estar en crisis. Es la potencialidad de la nueva derecha que emerge.

Pero esta situación no es un producto de las *fake news* o de campañas electorales bien construidas. Injusto es cargarles las culpas de problemas tan profundos a tales herramientas. Más bien, es el resultado del avance de la descomposición de la política, de ese espacio que no existe con un sentido pleno si es que no sirve para definir el futuro. Esto tienen en común los líderes de signo derechista que se potencian globalmente: su conservadurismo, y la radicalidad que se les arroja, no tiene que ver tanto con su cercanía con los militares, su desprecio por los derechos humanos, su misoginia o xenofobia. Todos estos, flagelos ya conocidos y no atribuibles a este período, no son sino armas a las que se recurre para trastornar cualquier discusión democrática posible.

En ese sentido, cabe poner atención a la enorme movilización desplegada el pasado 8 de marzo alrededor del mundo. Y es que, como potencial ensanchador de la democracia, el feminismo se eleva como un eje fundamental para la construcción de fuerza social y política que combata las sombras de nuestros tiempos.

Sebastián Caviedes

Director

Santiago, abril de 2019

UN CHILE QUE CRUJE:

EL TSUNAMI FEMINISTA

APROXIMACIONES AL “8M” CHILENO

Camila Miranda

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile
Directora Ejecutiva de Fundación Nodo XXI

***E**n este artículo se ensayan algunas aproximaciones al fenómeno del 8M chileno en el contexto de procesos complejos de modernización neoliberal y asentamientos hegemónico-culturales del carácter no individualizables en la condición de las mujeres en Chile y su creciente malestar. Se propone una mirada a algunos escenarios de oportunidades que abre la masiva movilización y se identifican particularmente los debates que empiezan a dibujarse en los campos de reacción de las derechas.*

La reciente movilización del “8M”, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se inscribe como la protesta más grande en Chile desde la vuelta a la democracia. Con ello, instala un escenario abierto de oportunidades para impugnar algunas bases del consenso cultural sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, así como de las posibilidades y necesidades de pensar desde el malestar de las mujeres, en un contexto de neoliberalismo avanzado, alternativas a un modelo que evidencia sus propias tensiones, especialmente para la mitad de la población.

Parece no ser casual que, en un escenario general de respuestas políticas con olor a viejas recetas: vías autoritarias, fundamentalismos y empobrecimiento de la política, haya un Chile y una parte del mundo que cruja. No solo por la tensa distancia entre las “conquistas” de derechos de las mujeres en aras a la igualdad -como su incorporación al campo educacional- y su situación real en las relaciones sociales implicadas -desvalorización del trabajo femenino, violencia de género, por nombrar algunas-, sino que también por las contradicciones propias de un modelo que ha promovido relatos de mayor libertad, pero que en diversas dimensiones de la vida evidencia su total restricción -como la indignidad de la vejez, las restricciones en los derechos sexuales y reproductivos y la brutalidad de la violencia lesbo y trans fóbica-. De ahí la urgencia de su análisis.

Por su parte, en el ciclo reciente de movilizaciones feministas, de las masivas protestas bajo la consigna “Ni Una Menos” ante los macabros casos de violencia en Chile y otros países, del “Mayo feminista” como rebeldía de las estudiantes ante las situaciones de abuso y violencia en las universidades, de la masividad de las movilizaciones por el “aborto legal, seguro y gratuito” y de las crecientes convocatorias para el 8M, cuya mayor expresión se alcanza en el llamado a huelga de este 2019, se va dibujando un proceso de activaciones feministas, construcción de organizaciones, lazos internacionales, debates teóricos y estratégicos sobre los feminismos y, al instalarse el feminismo como un significante que circula en la discusión pública, como disputa política abierta sobre su contenido y alcance transformador.

Una aproximación a la masividad del 8M chileno

“Históricas”¹ y “Mujeres exhiben su poder en Chile (...)”², fueron algunos de los titulares de los diarios tras el 8M. La imagen de una alameda desbordada y de más de 70 ciudades movilizadas en todo Chile, muchas por primera vez, hablan de la inculcable masividad y heterogeneidad de la convocatoria que logró el llamado a Huelga.

¿Por qué tal masividad?, ¿quiénes se movilizaron y por qué? son algunas interrogantes útiles de ser planteadas para pensar en las potencialidades de tal hito. Si bien hay un carácter multifactorial para explicar la movilización, una hebra que parece atravesarla es un desplazamiento en la tolerancia frente a las diversas expresiones de injusticia que se experimentan por el solo hecho de ser mujeres, poniendo en tela de juicio un campo de valores sociales naturalizados. De ahí los niveles disímiles de aproximación a la huelga y las diversas demandas que se expresan.

El contexto previo de movilizaciones feministas, como el “Mayo Feminista” y el sinnúmero de actividades que anteceden a la “huelga” produjeron un debate, que, aunque parecía subterráneo o reducido a las feministas, se tomó la conversación pública. Así, se produce un encuentro intergeneracional en los propios hogares, conversaciones y alianzas entre hijas y madres, e incluso abuelas. Alianzas en espacios profesionales de trabajo que van constituyendo asociaciones gremiales que se definen feministas, redes de solidaridad ante situaciones de violencia de género y, desde luego, múltiples iniciativas desde grupos activistas y puentes hacia otras luchas sociales.

Los días previos al tsunami feminista están marcados por una amplia agenda mediática acerca del Día Internacional de la Mujer, reportajes y estadísticas sobre la situación de las mujeres, conversaciones sobre el carácter festivo o no de la fecha, especialmente en un año que comenzó teñido de rojo y que dejaba entrever las limitaciones de la respuesta pública ante las denuncias por violencia. A su vez, la decidida iniciativa de la líder del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, con el despliegue de la campaña para que las mujeres denuncien, la suscripción de acuerdos con el empresariado para incrementar

1 Históricas. (9 de marzo de 2019). Diario *La Cuarta*, p. 4-6

2 Mujeres exhiben su poder en Chile con históricas marchas. (9 de marzo de 2019). Diario *La Tercera*, p. 2-8

la participación de mujeres en directorios y la revitalización de la ley integral contra la violencia, entre otras, tambalea. El cuestionamiento al llamado a huelga que realiza Isabel Plá y otros personeros del gobierno amplía la visibilidad de la convocatoria y elabora un antagonismo no difícil de producir en el campo de las luchas de las mujeres.

Pero más allá de una revisión contingente de hechos con suma positiva, cabe consignar que la masividad alcanzada, aún cuando heterogénea, es limitada. Esto pues hay un grupo importante de mujeres que se encuentra lejos de la interpelación feminista o de otras luchas por derechos, siendo identificables mayormente en la movilización grupos heterogéneos de mujeres cuya principal vía de incorporación social está marcada por el nivel de enseñanza alcanzado, destacándose una vía de carácter técnico-profesional³. Esto es concordante con procesos previos de politización asociables a las movilizaciones estudiantiles y/o a las contradicciones propias de incorporaciones al campo educativo y laboral que han supuesto nuevas formas de exclusiones en una lógica mercantilizada de la feminización⁴. Ésta observación no pretende relativizar el hito histórico que marca la reciente movilización, pero sí pensarla con agudeza, como tarea de elaboración necesaria hacia las desafíos que nos abre.

En esa línea podemos agregar que desde los distintos sectores: los feminismos y las fuerzas políticas, hay esfuerzos por promover ideales del “ser mujer” que entran en tensión o que son oportunidades de aprovechamiento para quienes tienen la capacidad de usarlas, como la derecha. Pues se desatiende una mirada más profunda a los dilemas propios de la producción cultural hegemónica del neoliberalismo en las mujeres, es decir, de la inexistencia de mujeres abstractas con deseos reductibles, sino que con contradicciones propias de expectativas de mayor libertad que muchas veces no se condicen materialmente, pero sí en el campo subjetivo, con una percepción de mayor integración, propia de una ruptura con el mandato patriarcal tradicional al acceder al mundo laboral formal y, con ello, al consumo. Entonces, se pueden apreciar discursos-interpelaciones de exaltación al rol colaborador de las mujeres con el proyecto país de base dictatorial y que se remiten a políticas de

3 Como se establece en los análisis del Instituto Nacional de Estadísticas, el grupo de mujeres ocupadas es más educado que el grupo de hombres ocupados, operando como mayor estímulo en la participación en la fuerza de trabajo. A su vez, y a diferencia de los hombres, la segunda concentración de mujeres ocupadas pertenece al nivel universitario de enseñanza y la tercera al nivel técnico. Sin embargo, el grupo mayoritario de mujeres ocupadas es aquél que alcanza el nivel medio de enseñanza, accediendo directamente al sector servicios. En: Género y Empleo. (2017, mayo) Enfoques estadísticos. *INE*.

4 Esto como parte del proceso de modernización neoliberal y del modelamiento y/o adaptación de la condición estructural de desigualdad de las mujeres. Para ahondar ver Ruiz, C. y Miranda, M. (2018, septiembre). El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: bases del malestar y de la ola feminista. *Anales de la Universidad de Chile*, (14), pp. 189-201.

la familia tradicional, o caracterizaciones sobre “la mujer trabajadora”, ya sea desde una perspectiva del empoderamiento o desde la apelación a sus precariedades, y/o ampliaciones del carácter de ciertos segmentos sociales de mujeres como los dilemas de todas, etcétera. De ahí que una mirada más profunda de la situación de las mujeres pueda ser central para mantener y acrecentar la masividad del 8M, y sino al menos para empezar a enfrentar con iniciativa las distintas agendas de género del gobierno atendiendo a las complejidades que tejen a las chilenas bajo el neoliberalismo.

En una aproximación desde los mundos feministas, la movilización deja a entrever -como lo ha hecho en otros momentos de la historia feminista-, las disruptivas lógicas de organización y asociatividad que tensionan las fórmulas clásicas de los movimientos sociales y que en ocasiones lleva a análisis que invisibilizan posibles campos de enfrentamiento a una asentada fórmula individual de asociación social, cuyo salto a una disposición colectiva se disuelve tras ciertos momentos de efervescencia. También, deja en evidencia un fenómeno propio de la crisis de legitimidad de la política, que dialoga con la aprendida desconfianza de las feministas hacia el procesamiento institucional, sobre la enorme brecha entre las demandas e intereses de las organizaciones que encabezan las movilizaciones y la actuación política desmovilizadora frente a ellas, a veces en excesiva parlamentarización y escasa apertura a debates públicos que viabilicen nuevos acuerdos sociales. Pero también por parte de las organizaciones, en agendas que a veces obvian caminos para sus avances tras grandes relatos de horizontes y/o en las dificultades para construir interlocuciones; son conocidas las lógicas de multi-representaciones de los mundos feministas. Finalmente, hay una diversidad de feminismos expresándose y disputando los significados y las formaciones de nuevas generaciones feministas. Sectores críticos de tradición socialista, radical, queer; sectores tradicionales de raigambre liberal y las denominaciones feministas de derecha, pero desde otras plataformas.

Si bien es familiar a la historia feminista aparentes momentos de silencio que preceden a las llamadas olas, una imagen que mejor describe la histórica jornada es la de un tsunami que, aún cuan-

do efímero, no “cesa” su avance sin haber dejado antes profundas huellas en su desborde.

Las derechas: profundización conservadora, populismo femenino y disputa liberal

A modo de antecedentes, el año 2018 sorprendía la capacidad de la ministra Isabel Plá para desplegar una agenda ante las movilizaciones de las estudiantes, que, si bien eludía la dimensión más profunda del alegato, la educación no sexista, en coherencia con un abordaje regulatorio-punitivo, articulaba actrices para dar una respuesta a las situaciones de violencia. El año 2019 comienza con una alta popularidad para la ministra, sin embargo, los sucesivos casos de femicidios dados a conocer, con cada vez mayor cobertura mediática, empiezan a complicar a su Ministerio, activando la agenda del gobierno anterior en relación al proyecto de ley “Violencia Integral”, junto a una campaña que llamaba a las mujeres a denunciar. Iniciativas que rápidamente contrastan con las noticias sobre los casos de femicidios en que efectivamente las mujeres habían denunciado, con la precariedad de los centros de acogida, varios cerrados y, con las movilizaciones de las trabajadoras de los Centros de la Mujer. Estas situaciones van poniendo en tela de juicio, no sólo la responsabilidad del Ministerio, sino que el agotamiento de una forma de abordaje de políticas públicas ante las situaciones de violencia, y, peor aún, en el campo de la prevención.

Se desconfía y cuestiona a la justicia en su capacidad para responder ante la violencia hacia las mujeres como un espacio de estigmatización y exposición que parece remontarnos aún al derecho de las 7 partidas y, con ello, a un cuestionamiento permanente hacia las mujeres, concordante con una ciudadanía devaluada o de segunda categoría. Con esto, a pesar de su atemporalidad, la autotutela se abre camino -y con ello los discursos de mano dura y orden- y además se acentúa la crisis de confianza en las instituciones como mediaciones sociales posibles. Desde luego, esta es una situación que viene cuajando desde los gobiernos anteriores, pero que, sin embargo, también abre posibilidades para elaborar sobre “lo justo” y sobre aspectos

estructurales de la violencia, como su dimensión económica y, a partir de allí, sentar un nuevo acuerdo social que pueda organizar una gran transformación de la justicia chilena.

Si bien a nivel nacional e internacional ha imperado por un largo tiempo una aproximación liberal a las políticas de género -la igualdad de oportunidades-, junto a los crecientes malestares feministas y a las tensiones que el modelo neoliberal ha ido evidenciando, se han ido formulando estrategias de abordaje que van mostrando las componentes de un pacto no siempre cómodo: el conservadurismo de tinte oligárquico con un liberalismo económico de valores progresistas. Más incómodo aún si se definen feministas ante la provocación del avance del feminismo en los espacios públicos (medios de comunicación, universidades, etcétera) y de la creciente masividad de las convocatorias feministas.

¿Qué “feminismos de derecha” podemos identificar?, ¿a qué sectores de la derecha representan y qué tensiones producen? Son preguntas a trabajar para entender y tener más alternativas que la mera reacción a sus arremetidas.

El llamado a huelga que realizan las feministas organizadas genera múltiples reacciones. El vínculo de la huelga con demandas como No+AFP, activa la respuesta del gobierno que relativiza el llamado haciendo una diferencia entre movilización y huelga⁵, importantes empresarios e intelectuales de derecha (mujeres) salen a delimitar cuáles sí serían las demandas de las mujeres, en oposición a un supuesto aprovechamiento político tras la convocatoria. Dichas reacciones dejan al menos dos aspectos en evidencia, por un lado las notas que toma el empresariado sobre el peligro de una impugnación de carácter estructural de una de las principales vías de su enriquecimiento, las AFP y el sistema previsional en general, sistema que afecta con especial rigor a las mujeres, por las lagunas y miserables pensiones, como por la mayor responsabilización en el campo de los cuidados que se traspasa como obligación sobre generaciones más jóvenes de mujeres en sus entornos familiares, privatizando un ámbito que de lo contrario debería ser un campo de responsabilización social y derechos asegurados. “Las justas demandas de las mujeres por equidad, en las que Chile ha avanzado y el gobierno tiene un

5 León, R. (2019, 4 de marzo). Gobierno rechaza paro feminista del 8M: “No hay que hacer huelgas”. *El Dínamo*.

compromiso”-armarán como relato-, “no pueden enturbiarse con un movimiento que se ha politizado”.

Otra demanda histórica feminista que despierta resistencias al incorporarse junto al llamado a huelga, es el aborto libre. Demanda que tensiona al sector más conservador de la derecha, el que hábilmente pone en primera línea a sus personeras políticas para disputar cuáles serían las razones de la movilización de las mujeres y relativizar el programa. A su vez, reflatan una identidad de mujer-madre que todavía tiene una fuerza cultural muy grande para amplios sectores de mujeres. Por su parte, cierto feminismo liberal asoma tímidamente en figuras como Sylvia Eyzaguirre y Lily Pérez, sin embargo sus posiciones son marginales si miramos el mapa ideológico de la derecha chilena y el peso que allí tienen posiciones abiertamente conservadoras.

Donde el feminismo liberal tiene más espacio es en el giro empresarial acerca de los avances en equidad que dice relación con una agenda propia de lo que desde los estudios de género se denomina “techo de cristal”, metáfora que hace alusión a los obstáculos para ocupar los altos espacios de dirección y que dialoga con un estrecho mundo de mujeres, pero que tiene amplia cobertura al constituir modelos de éxito a ser imitados y que calzan con algunas formas de subjetivación que el neoliberalismo ha ido produciendo⁶. Concordante, es un discurso respecto a los derechos de las mujeres en una variable de igualación de la cancha, que no tensiona los mecanismo de producción de desigualdades, primando una mirada tecnocrática de resultados y brechas que, ciertamente, abunda en Chile.

Por último, otra fórmula que se alumbra con su propio liderazgo en la derecha es el de un “populismo femenino”, que apelando a los estereotipos sobre el ser mujer resuelve necesidades concretas a través de políticas específicas que hacen gala de la efectiva división de la política que produjo la municipalización, estableciendo una relación directa más sustantiva para las personas que dependen en gran medida de las ayudas focalizadas. La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, representa este giro que condensa el reforzamiento de los roles tradicionales asociados a la mujer, la división sexual de trabajo y el apoyo material que resuelve necesidades concretas y sentidas de la población como

6 La Tercera. (2019, 29 de enero). #VíaInclusiva: Ministra Plá se reúne con Luksic para incentivar arribo de mujeres a directorios de empresas. *La Tercera*.

los cuidados de personas enfermas o adultos mayores. El alcance que este tipo de medidas generan en franjas de mujeres que actualmente no se sienten convocadas por el feminismo -y que no son pocas-, no debe ser desestimado.

Lo que en definitiva se aprecia es que la derecha ha tomado nota de que la emergencia feminista es un hecho insoslayable y que deben, a pesar de las tensiones que en su propio seno provoca el feminismo, elaborar una política que le permita recoger algunos elementos y contener aquellos que podrían fisurar la legitimidad del orden social. En tal escenario, se intensifica entonces la necesidad de disputar políticamente el sentido del feminismo.

El feminismo y la lucha política. Desafíos y oportunidades

Los desafíos que abren tanto el malestar de las mujeres en el avanzado neoliberalismo chileno como la activación social que se ha producido en los últimos años, cuya mayor muestra ha sido el pasado 8M, son enormes. El movimiento feminista actual enfrenta el desafío de asumir y resolver viejas tensiones que vuelven a presentarse, junto con hacer frente a nuevas tareas propias de las condiciones del presente, como la necesidad de ampliar su carácter social y disputar la conducción de malestares sociales que se expresan, cuestiones en las que todavía la derecha y los sectores conservadores tienen amplia cancha, sobre todo ante la inexistencia de una oposición que dispute desde un proyecto alternativo.

La movilización del pasado 8M fue inmensa y sin duda en su masividad radica buena parte de su fuerza. Sin embargo, la historia reciente nos muestra que “la calle” es un elemento esencial, indispensable, pero no suficiente para el enfrentamiento de intereses sociales organizados. En Chile ya tenemos experiencia de que tras grandes movilizaciones sociales, como fueron aquellas por la educación pública y gratuita en 2011, se fortaleció todavía más el mercado educativo con recursos públicos. En nuestro caso, por la propia naturaleza heterogénea del movimiento feminista y su rechazo de las formas tradicionales de la representación política, es un enorme desafío convertir la masividad expresada en las calles en fuerza social

y política para que toda esta movilización no se convierta en una renovación del pacto social neoliberal o en acumulación de frustración social. Las fuerzas neoliberales ya están en eso y sabemos que para hacer prevalecer sus intereses actúan como un bloque.

Para las organizaciones políticas emergentes y de oposición, que deben plantearse el problema de la construcción de fuerza social y política para enfrentar al ciclo neoliberal en Chile y abrir caminos de democratización y reconstrucción de derechos sociales, es crucial entender lo que se juega en esta irrupción del movimiento feminista y de mujeres. Las posibilidades de acumular fuerza para el campo subalterno son tan grandes como los peligros de acabar renovando el neoliberalismo en nombre de los derechos de las mujeres. Las fuerzas políticas emergentes son parte sin duda del heterogéneo espacio del feminismo hoy en día, pero las inercias de formas políticas tradicionales, como la instrumentalización de movimientos sociales, la suplantación de actorías, la presión ejercida sobre los movimientos en coyunturas electorales, la parlamentarización de los conflictos sociales, etc., son vicios que el movimiento feminista rechaza con razón, presionando a las organizaciones políticas a revisar sus prácticas y sus maneras de relacionarse con los sectores organizados de la sociedad. Inventar nuevos términos de articulación es también un desafío y una necesidad política.

El escenario está abierto. Lo abrió el feminismo. La posibilidad de una democratización social y política que acompañe al cambio cultural que está encabezando la arremetida feminista, una democratización que no dividida lo personal de lo político, ni la casa de los asuntos país, es una de las mayores oportunidades que tenemos. Tendremos que estar a la altura.

HUELGA FEMINISTA COMO MOVIMIENTO ESTRUCTURANTE DE TRANSFORMACIÓN POLÍTICO-ECONÓMICO-CULTURAL

Claudia Pascual

Antropóloga Social

Integrante de la Comisión Política

Encargada del área Género del Partido Comunista de Chile (PC)

Se realiza un balance sobre el llamado a Huelga Feminista del pasado 8 de marzo, identificando en tal proceso la construcción de una movilización estructurante de un movimiento político, económico, social y cultural transformador. Se plantean, en ese sentido, algunos desafíos y obstáculos que se abren para el movimiento feminista tras este hito histórico.

Este 2019 se realizaron las movilizaciones más masivas y transversales en el contexto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y por todos los derechos de las mujeres en la sociedad. La convocatoria a una Huelga Feminista con diversas manifestaciones y movilizaciones a lo largo del día, pero también con jornadas de debate y agitación en preparatoria a dicha jornada, permitió a una gran cantidad de mujeres, de feministas, de diversos sectores de la sociedad sumarse a dicho espacio. Sindicatos, organizaciones territoriales, militantes de partidos políticos y sus orgánicas, estudiantes, diversidad y disidencia sexual, familias y también hombres fueron parte de estas movilizaciones.

Las mujeres somos y debemos ser protagonistas absolutas de este movimiento. Que podamos rescatar y visibilizar cada vez con más fuerza la diversidad de mujeres que habitamos nuestro país y el mundo, y que podamos abrazar el conjunto de demandas que hacen que todas y cada una pueda liberarse del tipo de sociedad patriarcal y capitalista que tenemos. Además, hay que invitar a sumarse a esta transformación a los hombres, donde ellos también reflexionen, se deconstruyan de la formación machista y aporten también a los cambios más acelerados en todas las instituciones, estructuras, colectivos y familias.

Por eso creo que es posible que el movimiento feminista o de los feminismos pueda avanzar en la construcción de un movimiento social y político/político y social, económico y cultural, que sea amplio en la capacidad de aunar esfuerzos y alianzas con otros segmentos de la sociedad para avanzar más rápidamente en las transformaciones que tanto necesita nuestro país. Dicho de otro modo, también, que no sea un movimiento pasajero, sino un movimiento estructurante de las luchas políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país, que sea un movimiento dúctil a la hora de las alianzas, que permita la transformación del Estado, de las orgánicas y partidos políticos, de las organizaciones sindicales y sociales, etc. Un movimiento que reconozca y defienda lo hasta ahora conquistado en derechos para las mujeres, pero sobre todo sea capaz de buscar y alcanzar nuevos derechos, conquistar la transformación más profunda que implica superar el patriarcado y buscar nuevos modelos de sociedad no capitalista.

El movimiento feminista es profundamente político, y en su desarrollo actual existe la imperiosa necesidad de dar mayor velocidad a los cambios para alcanzar la igualdad y equidad de género plena. Pero como en otros procesos políticos parece importante tener en cuenta que existe una tensión no siempre fácil de resolver en relación a procesos que llevan más tiempo porque remiten a transformaciones culturales, versus acciones, legislaciones y políticas que pueden hacer la diferencia en breve tiempo en el cambio de las condiciones de vida de las mujeres. Por eso se entiende la interpelación a todo nivel para la transformación, pero también es bueno reconocer que no es lo mismo avanzar con un movimiento fuerte, masivo, transversal, apoyado por estructuras político, sociales y económica, incluso con gobiernos que creen y se comprometen en profundidad con sus demandas y derechos, que cuando no existen esas condiciones.

Ahora bien, ¿por qué se logra esta amplitud y masividad este 8 de marzo? Sin ánimo de dar una explicación exhaustiva y que cierre el debate, creo importante rescatar algunos elementos centrales.

Primero, el aumento de conciencia de las condiciones de discriminación, subordinación y de violencia que viven las mujeres no sólo en nuestro país, sino en el mundo. A pesar de que nadie puede negar que las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país hoy son más avanzadas que hace 30, 50 o 100 años atrás, no es menos cierto que hay mayor conciencia de todo lo que nos resta resolver para alcanzar la igualdad y equidad de género plena, como también para erradicar uno de los problemas más generalizados y durante muchos siglos normalizado como es la violencia de género y, en especial, contra las mujeres.

Segundo, el cada vez más amplio y completo abanico de demandas y derechos a conquistar, desde la concepción de las autonomías económica, física y política de las mujeres (condiciones laborales, derechos sexuales y reproductivos, derecho a decidir, a organizarse y representar lo público, etc.), que hace que la diversidad de mujeres que habitamos nuestro país podamos encontrar espacios y demandas concretas para nuestra lucha.

Tercero, el avance en la conciencia de que los derechos de las mujeres, la emancipación y liberación de las mujeres de estas

condiciones de opresión, discriminación y violencia, pasa también y junto a una transformación económica, política, social y cultural del sistema capitalista en el que vivimos. Capitalismo y patriarcado han sido un matrimonio perverso a lo largo de la historia para la condición de las mujeres en el mundo, y, por cierto, en nuestro país.

Cuarto, porque dentro de la transformación que mencionáramos en el punto anterior, el cambio cultural que nos interpela como sociedad, estructuras e instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y políticas, como sistema educacional, como sujetos(as) y colectivos, es tan profunda que no basta con una ley, una política pública, o una declaración pública para llevarla a cabo, sino que son todas esas acciones —y más a la vez y de forma sistemática— las que pueden hacer que se vaya cumpliendo. La tarea por la deconstrucción patriarcal, capitalista y machista es un esfuerzo consciente y sistemático en el tiempo, que requiere el concurso de todos, todas y todes, en definitiva.

Quinto, se está produciendo la comprensión de que no hay un ranking o una prelación de demandas o derechos que indique qué es primero y qué puede esperar, sino que debemos avanzar en todas las direcciones al mismo tiempo, pero, sobre todo, ha aumentado la impaciencia, o, dicho de otro modo, aumentan las visiones y opiniones que debemos acelerar el paso de estas transformaciones y conquistas de derechos.

Sexto, porque ya no son los tiempos de que nuestra sociedad siga tolerando la violencia contra las mujeres. Hoy parece políticamente incorrecto seguir naturalizando un hecho de violencia de género y/o contra las mujeres, pero no es menos cierto que la dilación en la condena de las manifestaciones de violencia tan extrema como el femicidio, y con mayor frecuencia en las de violencia no tan extrema, van dejando una sensación de impunidad en la población, y muy en particular en las mujeres y sus círculos, que desacreditan el actuar de las instituciones públicas, organizaciones y colectivos.

Este movimiento feminista o de los feminismos también nos convoca a una batalla de ideas, a un debate no sólo propio entre las corrientes feministas, sino también con sectores políticos ideológicos que no han buscado la transformación del patriar-

cado y del sistema capitalista. Es cierto que el patriarcado y el machismo han existido en sociedades no capitalistas (más antiguas y contemporáneas a él), pero no es menos cierto que el matrimonio entre patriarcado y capitalismo ha sido un matrimonio perverso para las mujeres.

En las jornadas de este 8 de marzo, asistimos al cuestionamiento, desde las formas de la movilización hasta el contenido de las demandas, por parte del gobierno del Presidente Piñera, sus ministras y la mayoría de su conglomerado. Cuestionamiento que incluso identificó y advirtió de la “instrumentalización” que partidos políticos de oposición harían de la huelga y las movilizaciones¹. Cuestionamiento que, a horas de ver la masividad y amplitud de las movilizaciones, se olvidan mágicamente y declaran que ahora sí las demandas de las mujeres en Chile “están en el corazón del gobierno”². No es de extrañar el cambio de discurso, en una derecha que hace del populismo su ADN, populismo que consiste en adscribir a los títulos de las canciones (por decirlo así) pero que no comparte la profundidad de los contenidos de sus estrofas y estribillos. Pero lejos de conformarnos con esta explicación, es necesario advertir la gravedad de este cambio de discurso: quien intenta instrumentalizar las demandas y el movimiento es el propio Gobierno, y en un acto de “proyección”, como dirían las y los psicólogos, apunta esa instrumentalización a otras identidades políticas, en este caso de oposición a su Gobierno. Esto es grave, porque todos los derechos que las mujeres han y hemos conquistado en el mundo, pero muy especialmente en nuestro país, le han sido arrebatados al capitalismo, han sido peleados, luchados y conquistados frente a cada gobierno de turno. No han sido regalos.

El debate de ideas feministas se dará entre quienes se consideran aliadas, y también con quienes sólo abracen la idea de más derechos, pero sin derrumbar las desigualdades de clase, de etnia, de identidades de género, de identidades migrantes, entre otras. Sobre todo, con aquellos feminismos liberales que no cuestionan el hecho de que algunas mujeres sean “más liberadas y menos discriminadas” porque existe un modelo económico de explotación capitalista sobre mujeres y hombres, y que en ese modelo la economía del cuidado permite la explotación

1 Caro, I. y Soto, X. (2019, 1 de marzo). Ministra Plá abre controversia tras cuestionar huelga feminista. *La Tercera*.

2 Cooperativa. (2019, 9 de marzo). Piñera tras marcha feminista: La causa de las mujeres por mayor igualdad es la causa de este Presidente. *Cooperativa.cl*

de mujeres a otras mujeres para que ellas puedan tener esa liberación. Esto en nuestro país queda claramente identificado cuando hoy existen sectores que, habiendo denostado de los feminismos, como movimiento político, o decretado que las demandas son innecesarias o poco representativas, luego en un acto casi de prestidigitación aparecen incluso declarándose feministas como la senadora Van Rysselberghe, cuando la propia ex senadora Lily Pérez reconoce que esa declaración significa que no ha entendido lo que es el feminismo³. Esto no sólo es un acto de instrumentalización por parte de la de la derecha, sino también una cortina de humo, un intento por ocultar cómo han votado frente a los derechos que les hemos arrebatado al capitalismo como organizaciones de mujeres, de feministas y de mujeres trabajadoras. Por tanto decir que la derecha siempre ha estado con estos derechos no es cierto, cuando hasta en los debates parlamentarios de los últimos cinco años, bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, se han opuesto a que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se llamara así, por qué no el de la familia, se opusieron a los criterios de paridad en el cambio al sistema electoral binominal, cuando no comparten la educación no sexista, o cuando lo que ofrecen para más incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar es más flexibilidad pero en condiciones de precariedad, o cuando siempre han cuestionado el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, la interrupción del embarazo en tres causales o el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos.

Es cierto que existen distintas corrientes de feminismos, pero declararse feminista desde la derecha hoy en nuestro país parece una mentira grande, porque no buscan ni terminar con el patriarcado, ni mucho menos con el capitalismo, el feminismo liberal no busca esa transformación profunda. Lo anterior, no implica que otras colectividades políticas ideológicas no nos hagamos una interpelación profunda de cómo irnos transformando para recuperar incluso la visión de construcción de sociedades distintas y nuevas con mujeres, hombres, gays, lesbianas, trans nuevos; sujetas, sujetos, sujetos nuevos, donde la liberación del capitalismo es con feminismo y el feminismo es con liberación del capitalismo.

3 Ahumada, M.J. (2019, 16 de marzo). Lily Pérez, ex senadora: “El gobierno está atrapado: no tiene cómo avanzar en una agenda feminista”. *La Tercera*.

En otro orden de ideas, y a propósito de varios foros que he podido estar en estas semanas, es indudable que existe no sólo en el plano de la batalla de ideas, sino en el quehacer cotidiano de los movimientos, una desconfianza hacia todos los partidos políticos. Y es entendible en la crisis de representación política que vive nuestro país, porque también hay muchos ejemplos de mal actuar en varias colectividades, ya sea en corrupción, abandono de ideales, negociaciones al margen de lo que las mayorías quieren en cambios y transformaciones, como también desde el punto de vista de no coherencia con valores de la no violencia de género y contra las mujeres. Pero creo que trasladar esas desconfianzas y separaciones a un sectarismo anti partidos, donde los partidos sean los malos y las organizaciones las buenas por el solo hecho de ser identidades distintas, no ayuda a establecer nuevas y mejores relaciones. Creo en la transformación de los partidos políticos hacia estructuras menos patriarcales y con profundo compromiso hacia las demandas feministas, pero las organizaciones sociales también deben velar por estas transformaciones. En una organización social también se puede dar la corrupción, el autoritarismo o prácticas machistas. Cuando hablamos de que los movimientos sociales son independientes de los partidos políticos, no significa una ruptura y una negación del otro, significa que el partido o los partidos no tienen una relación instrumental, paternalista o de orden y mando frente a los movimientos y organizaciones sociales. La relación debe ser bidireccional, donde puedan darse espacios de construcción en confianza y respeto de las autonomías de ambos.

La independencia del movimiento y organizaciones feministas deben también influir en los gobiernos, rechazando lo que precariza o lo que va en contra de los derechos de las mujeres, alertando sobre cambios que no van al fondo, pero también valorando lo positivo y los avances en materia de igualdad y equidad de género, de despatriarcalización de la sociedad y de nuevos modelos de desarrollo que dejen la senda del capitalismo. Esto no impide mantener las banderas en alto de los procesos feministas más profundos, ni criticar incluso gobiernos o políticas públicas que no avanzan en esa línea. Pero precisamente por el avance de las derechas y extremas derechas en los

gobiernos de América Latina, no da la mismo quién gobierne. Y esto no es un cheque en blanco como algunos a les gustaría que fuera: debe exigir compromisos programáticos con los movimientos feministas.

Buscar una relación de unidad desde la diversidad, de los movimientos feministas y los partidos que tengan ese compromiso, sean más antiguos o emergentes, con otras organizaciones sociales, sean tradicionales o de temáticas emergentes, se declaren o no feministas, pero que busquen los cambios ya nombrados.

De ahí la necesidad imperiosa de una nueva Constitución, que permita la consagración de derechos sociales, económicos, políticos y culturales que hoy no se nos permiten. Una nueva Constitución que respete a los partidos y a las organizaciones sociales, que termine con la discriminación y prohibición que, por ejemplo, existe para las dirigentas y dirigentes sindicales no puedan ser candidatos al Parlamento. Pero también que podamos avanzar y alcanzar prontamente la diversidad de demandas levantadas en estas últimas jornadas, y que encuentren eco en la nueva Carta Magna debatida y aprobada democrática y participativamente.

Demandas que se escucharon en las calles, centros de trabajo, centros educacionales, en los barrios, en las organizaciones políticas y sociales, en el debate de las familias, y que son diversas e incluyentes de amplios sectores porque hablan de un Chile que debe ser distinto, más justo, más igualitario, sin abusos de los poderosos y sin violencia. Por eso no es de extrañar las demandas por más trabajo decente y estable, sueldos dignos y sin brecha salarial, nuevo sistema de pensiones, derecho a la vivienda digna, a una corresponsabilidad de verdad en el cuidado de los y las hijas, con salas cuna para todos los y las trabajadoras con hijos menores. Corresponsabilidad social en el cuidado de las y los familiares en situación de discapacidad, no valentes o adultos(as) mayores, con un sistema nacional de cuidado que no sólo tenga en el centro a los(as) que requieren este cuidado, sino que libere de esta función que histórica, cultural y exclusivamente han realizado las mujeres en sus familias sin remuneración. Que se compartan las labores del tra-

bajo doméstico porque es trabajo. Que se prevenga, sancione, repare y erradique la violencia contra las mujeres y de género en todas sus manifestaciones y contextos. Que ponga fin a la violencia contra las mujeres indígenas, en especial las mujeres mapuche, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Que exista verdad y justicia plena para las violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar. Que exista una ley de migraciones basada en los DDHH, y el pleno respeto a las mujeres migrantes. Por cierto, terminar con la educación sexista, el fin a los liceos sólo de hombres o sólo de mujeres, educación sexual laica y en respeto a las identidades de género, aborto por plazos, seguro y gratuito, atención de salud pública de calidad en todo ciclo vital de las mujeres, que los programas que atiendan la infertilidad también estén en el sistema público como parte de las prestaciones, democracia paritaria y nueva Constitución que consagre los derechos sociales y la igualdad y equidad de género.

Finalmente, quisiera empezar a perfilar algunos desafíos del movimiento feminista y que nos deja el llamado a la Huelga Feminista, y también algunos obstáculos que debemos sortear.

Desafíos que nos dejan estas movilizaciones son avanzar en un movimiento con capacidad de hacer alianzas para la transformación profunda. Que sea un movimiento que perdure en el tiempo, para lo cual es clave evitar el aislamiento y estigmatización que se buscará del mismo, pero que trabaje sin sectarismos. Que mantenga el protagonismo de las mujeres y que invite a la transformación a los hombres con sus propios procesos de deconstrucción cultural. Un movimiento que busque ir ampliando las demandas que haga concreta la lucha de segmentos de mujeres que no se sienten feministas porque no quieren ser estigmatizadas o porque lo desconocen. Un movimiento que pueda ir transformando desde dentro también a los sindicatos, organizaciones sociales, partidos, Estado, familias, colectivos y seres humanos todos, entre otros.

Los obstáculos que se pueden visualizar también se deducen de los desafíos, pero no sólo de los vinculados al movimiento de los feminismos, sino del ejercicio de la política y las organizaciones todas en nuestro país. Nos referimos a:

La falta de comprensión de que se necesitan procesos de unidad de mujeres y organizaciones feministas, y organizaciones políticos-sociales para lograr avanzar con más fuerza en la conquista de derechos y en la transformación de la sociedad.

Desconfianzas y divisiones dentro de los feminismos transformadores, feminismos con distintos apellidos para promover la falta de acción unitaria, el sectarismo y la fragmentación del movimiento. Peligro de separatismo de género.

El contexto cultural individualista profundo del ejercicio de la política en general hoy, que da paso a las fragmentaciones, divisiones, personalismos, e incluso a la captura por parte del mercado de prácticas liberadoras como marketing de venta o falsos modelos de liberación de la mujer en este caso (“apoyamos tu revolución” ... cámbiate a tal compañía teléfonos móviles).

Contexto de un gobierno de derecha, que cree compartir y que está con todos los derechos de las mujeres porque son “parte del corazón del gobierno” y porque los resolveremos en cuatro años con nuestra agenda Pro Mujer. Y, sin embargo, no comparte las profundidades del proceso y demandas, ya que ideológicamente cuestionan los feminismos. Por otro lado, los ofrecimientos de más incorporación al mercado laboral para mujeres, pero a partir de flexibilización con precariedad: más trabajo a domicilio y teletrabajo, profundizando los roles tradicionales.

En fin, desafíos y obstáculos puede haber muchos más, pero la importancia que ha adquirido el movimiento feminista hoy en nuestro país nos deja más expectativas positivas y esperanzas que oscuridades.

**CINZIA ARRUZZA**FUENTE: cuartopoder.es

“Es el feminismo el que está articulando la oposición social y política a la derecha”

Cinzia Arruzza es académica de la New School for Social Research (Nueva York) y activa militante feminista. Visitó Chile en marzo de este año invitada por el Grupo de Estudios Feminista con la colaboración del Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas de la Universidad de Chile. Durante su estadía presentó su libro más reciente *Feminismo para el 99%. Un manifiesto (2019)* escrito en coautoría con Nancy Fraser y Tithi Bhattacharya.

Conversó con Pierina Ferretti, investigadora de la Fundación Nodo XXI y parte del equipo editorial de *Cuadernos de Coyuntura*. Agradecemos a Cinzia el concedernos esta entrevista en su apretada agenda en Chile y al Grupo de Estudios Feminista por facilitar este encuentro y hacernos parte de las actividades que Cinzia desarrolló en su visita.

*Pierina Ferretti. Editora de *Cuadernos de Coyuntura*

*Traducción: Sofía Brito y Vicente Montenegro

Has sido una activa organizadora de la Huelga Internacional de Mujeres y acabamos de tener una enorme movilización en distintos lugares del mundo. ¿Cuál es tu balance de esta jornada y cuáles son los desafíos que se abren para el movimiento feminista internacional después de esta gran movilización?

Primero tenemos que distinguir los Estados Unidos del resto del mundo. Allá no tuvimos realmente una gran movilización este año en el 8 de marzo y una de las principales razones fue que la *Women's March*¹, la organización que convocó esa gran movilización contra Trump se convirtió en una ONG y eso, por supuesto, no facilitó realmente la organización de una gran movilización desde abajo y la dinámica de movimiento. Además, el año pasado, en 2018, hubo una decisión política de centrarse en las elecciones, entonces la consigna fue *power to the polls* (poder para las urnas). La idea era que la resistencia contra Trump debía moverse desde las calles hacia las urnas y el objetivo fue elegir la mayor cantidad de candidatas progresistas como fuese posible y, por supuesto, se trataba de candidatas del Partido Demócrata. Esto claramente desmovilizó, en el sentido de que nosotras como *Internatinal Women's Strike*² no tuvimos las redes, ni la infraestructura, ni el dinero, ni la visibilización para gatillar un proceso de movilización feminista y ellas (*Women's March*) fueron el punto de referencia para la mayoría de la gente que quería movilizarse por el feminismo y esto tuvo un fuerte impacto en la posibilidad de tener un movimiento.

Nosotras en Estados Unidos organizamos marchas en algunas ciudades, pero fueron pequeñas y lo que estamos haciendo ahora especialmente es tratar de popularizar el movimiento feminista en Estados Unidos, porque uno de los problemas en la izquierda de este país es que no presta mucha atención a lo que pasa en otros lugares del mundo, es un poco aislada. Realmente la izquierda estadounidense no discute sobre las luchas políticas de otros lados, ni la posibilidad de inspirarse en ellas. Es realmente muy difícil. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es entrevistar a feministas que organizan el movimiento a nivel internacional. Por ejemplo, organizamos una gira de nuestras compañeras Luci Cavallero de Argentina³ y

1 Ver: <https://womensmarch.com/>

2 Ver: <https://www.womenstrikeus.org/>

3 Activista feminista y militante del Colectivo argentino Ni Una Menos: <http://niunamenos.org.ar/>

Julia Cámara de España⁴, precisamente en el intento de popularizar el movimiento, de mostrar que hay algo importante que está sucediendo a lo largo del mundo. Eso con respecto a los Estados Unidos.

Ahora bien, internacionalmente, pienso que esto es inmenso. El movimiento este año creció y se expandió en diversos países que no tenían movimiento feminista en años recientes como, por ejemplo, Bélgica y Suiza; en Alemania se organizó la huelga por primera vez y hubo también un proceso en Francia, un intento de organizar, aunque es pequeño todavía. En Italia hubo una gran huelga general que fue más grande que el año pasado y en España fueron seis millones en huelga de acuerdo a los datos de los sindicatos más conservadores. También aquí en América Latina. En Chile claramente fue enorme, fue inmenso; en Argentina continúa creciendo y fortaleciéndose. Hubo varias manifestaciones en ciudades importantes de Brasil y también en México. También en países como Turquía, en Estambul hubo una manifestación masiva que fue atacada por la policía ya que el contexto es extremadamente difícil. Entonces, creo que el movimiento está en una dinámica expansiva, está creciendo, está todavía muy vivo y esto por supuesto nos plantea el problema de qué hacer más allá de la organización del 8M o más allá de organizarnos contra la violencia de género internacionalmente, porque claramente el movimiento está creciendo, pero no puede ir solo de una manifestación a otra y la discusión sería que tenemos es ¿qué debemos hacer ahora?, ¿cómo expandimos este movimiento más allá?

No tengo una receta para esto, pero ciertamente pienso que después de tres años de huelga de mujeres es el momento de fortalecer la coordinación internacional del movimiento para establecer los puntos que debemos discutir entre nosotras y cómo podemos organizar encuentros transnacionales. En Italia, por ejemplo, están discutiendo llamar a un encuentro europeo y mediterráneo y sería genial poder organizar uno en las Américas, no solo de América Latina (para que Estados Unidos despierte). Y estamos pensando en el futuro la posibilidad de reuniones globales y la razón por la cual esto es importante es que, si bien este movimiento está luchando por

4 Activista feminista y militante de Anticapitalistas: <https://www.anticapitalistas.org/>

demandas locales, también está articulado transnacionalmente en sus luchas y para hacer esto mejor creo que son necesarias discusiones internacionales, para la coordinación, el intercambio de ideas, de prácticas, etc. Esto es lo primero.

Además, pienso que uno de los elementos del poder de este movimiento es que en muchos países se ha roto con ciertos aspectos del feminismo de la segunda ola, como, por ejemplo, el separatismo o la exclusión de las trabajadoras sexuales o las mujeres trans y en varios países las manifestaciones son mixtas, si bien, obviamente, las lideresas son mujeres trans y cis. Y creo que esto es muy importante, ya que el poder de este movimiento es su potencialidad de lo que ustedes en América Latina llaman “transversalidad”, el poder involucrar a toda la sociedad, el poder movilizar todos los aspectos de la sociedad, desde los lugares de trabajo a la producción social, escuelas, universidades, hospitales, etc., y hacerlo desde la perspectiva de un feminismo anticapitalista. Pienso que esto es algo realmente poderoso y deberíamos insistir en ese punto.

Ahora hablemos de la contracara de esto. Si bien es innegable que el movimiento de mujeres y el feminismo está teniendo una capacidad de movilización y de coordinación a nivel internacional que no tiene en este momento ninguno de los actores tradicionales del siglo XX (movimiento obrero, partidos políticos de izquierda, etc.), es innegable también el avance que han tenido las fuerzas conservadoras y las versiones más radicalizadas de la derecha, con un discurso anti derechos, homofóbico, misógino y autoritario. Se observa incluso el avance de un discurso abiertamente antifeminista, que pone al feminismo como una amenaza para la familia y el orden social. El problema que vemos es que estos discursos no son marginales, sino que tienen capacidad de dar dirección cultural a importantes franjas sociales. Bolsonaro ganó por las urnas. ¿Cómo explicas estos avances de la derecha radicalizada? Además, tú acabas de publicar un libro sobre *La República* de Platón en el que discutes su tesis de que la tiranía es producto de un exceso de democracia⁵. ¿Qué elementos de esa reflexión te sirven para comprender estos giros autoritarios?

5 Arruzza, C. (2019). *Wolf in the city. Tyranny and the tyrant in Plato's Republic*. Oxford: Oxford University Press.

Voy a comenzar por el libro. Mi intento en este libro fue mostrar que la crítica de Platón a la tiranía es realmente una crítica a la democracia y es, además, una crítica antidemocrática a la democracia. Entonces debemos estar muy atentas a los argumentos que sostienen que son los excesos de la democracia los que producen la tiranía. Este es un argumento que Platón articuló en *La República* y que encontramos a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental. Pienso que debemos dejar esto atrás. Y ¿por qué? porque es lo que vemos alrededor. Si miramos por ejemplo a Trump en Estados Unidos, hay muchos artículos que citan a Platón y señalan: “Ah, Platón estaba en lo correcto cuando decía “miren lo que pasa cuando hay mucha democracia””. Y estos son artículos escritos por liberales que supuestamente están defendiendo el sistema democrático. Sin embargo, este argumento es paradójico, porque si tú miras la forma en que funcionan las elecciones en Estados Unidos, está absolutamente claro que es difícil llamar a Estados Unidos una democracia: por la forma en que funciona el sistema electoral, por la enorme cantidad de gente que está privada de derechos civiles o porque están encarcelados y entonces no tienen derechos políticos o porque están bajo libertad condicional también sin derechos políticos o porque no pueden registrarse para votar porque son pobres y no pueden viajar al lugar donde están las urnas. Y, por supuesto, esta gente que está privada de derechos civiles son negros, latinos y gente blanca pobre. Entonces hay una exclusión en las elecciones de un gran sector de la clase trabajadora, especialmente de la parte racializada de la clase trabajadora. Por lo tanto, se podría decir que si esta gente hubiese votado Trump no habría ganado o al menos podemos imaginar que hubiesen tenido menor interés en votar por él. Espero que mi libro ayude a clarificar que estos son argumentos que tenemos que desechar. Necesitamos más democracia, no tenemos exceso de democracia en ningún lado, solo tenemos déficit de democracia.

Ahora bien, lo señalamos en el *Manifiesto...*⁶ que escribimos con Nancy Fraser y Tithi Bhattacharya, pienso que el gran problema actualmente es que tenemos un número de fuer-

6 Arruzza, C., Bhattacharya, T., y Fraser, F. (2019). *Feminism for the 99 %*. A *manifiesto*. Londres: Verso Books. El libro ya ha sido traducido a más de diez idiomas y cuenta con catorce ediciones en distintas partes del mundo. Para América Latina ha sido publicado por la editorial argentina Rara Avis. Se pueden seguir las noticias y ediciones del libro en <https://www.feminismforthe99.org/>

zas democráticas o auto-llamadas progresistas alrededor del mundo (lo que nosotras llamamos neoliberalismo progresista), que llevaron adelante medidas de austeridad y políticas neoliberales que contribuyeron a atacar -en el nombre de la modernización- los derechos laborales y a dismantelar el Estado de bienestar, que contribuyeron a deteriorar las condiciones de vida de las personas y que administraron la crisis del 2008 haciendo a la gente común pagar por ella en vez de a los bancos. Pensemos en Obama rogando a Wall Street. Al mismo tiempo, la razón por la cual llamamos neoliberalismo progresista a estas fuerzas es que se han atrapado a sí mismas en este lenguaje y discurso progresista, pro derechos para la población gay, pro mujeres, pro elección y antirracista (aunque son ellos quienes deportan a los inmigrantes). Entonces, lo que está pasando ahora es que hay un nuevo fascismo o fuerzas políticas reaccionarias que están emergiendo y creciendo, que se presentan como quienes pueden resolver la crisis provocada por las políticas que deterioraron las condiciones de vida de millones de personas pero que identifican la fuente de los problemas precisamente en estos aspectos del neoliberalismo progresista; entonces, el problema son las personas trans o el problema son los migrantes o el problema son las mujeres, la libertad de las mujeres que está desintegrando la familia. Es un fenómeno muy peligroso, porque son fuerzas capitalistas que no proveen ningún tipo de respuesta para las necesidades reales de la gente, sino que básicamente proveen una narrativa tóxica para entender lo que pasa, que no apunta realmente al capitalismo o al neoliberalismo y que utiliza a los migrantes, las mujeres, la gente racializada o las personas *queer* como chivos expiatorios.

Uno de los riesgos es que básicamente estamos atrapados entre los progresistas neoliberales y la extrema derecha y por supuesto la gente tiende a pensar que tiene que apoyar a las fuerzas democráticas para que nos defiendan. Sin embargo, como señalamos en el *Manifiesto*, ninguna de estas alternativas es una solución, porque en realidad son complementarias. Entonces, desde nuestro punto de vista, el movimiento feminista está realmente indicando el camino hacia de salida con

estas masivas movilizaciones contra la derecha. Si miramos Argentina, Brasil, Italia es el feminismo el que está articulando la oposición social y política a la extrema derecha. No por casualidad, sino que precisamente porque nos están atacando a nosotras primero.

Otra razón (del crecimiento de las fuerzas reaccionarias y de extrema derecha) creo que tiene que ver con la crisis de la masculinidad que está ocurriendo a lo largo del mundo. La crisis de la masculinidad es algo bueno, pero que desafortunadamente está conectada con el efecto del neoliberalismo sobre las condiciones de la vida. Los hombres ya no pueden ser más el sostén de la familia porque están desempleados, precarizados, etc. Esta crisis de masculinidad también produce esta violencia tóxica contra las mujeres. Entonces de nuevo no veo otra alternativa que luchar por una gran expansión del movimiento feminista contra todo esto.

Recientemente has publicado junto a Nancy Fraser y Tihti Bhattacharya el libro *Feminismo para el 99%. Un manifiesto* y allí sostienen que el feminismo tiene capacidad para articular distintas luchas sociales anticapitalistas en el mundo de hoy. Sin duda, en diferentes lugares del mundo observamos procesos de resistencia y de lucha contra las condiciones de vida a las que grandes masas de personas están sometidas. Sin embargo, observamos también que la articulación y la acumulación de fuerza en el campo subalterno aún es insuficiente para hacer avanzar los intereses de las mayorías frente a los del capital. ¿De qué maneras crees que esta heterogeneidad y la fragmentación puede ser articulada por el feminismo?

Es una pregunta difícil. En realidad, la fragmentación es un producto del capitalismo y de la manera en la que el capitalismo produce diferentes formas de opresión que también están conectadas con diferentes formas de subjetividad. Y este proceso es particularmente evidente en países donde el neoliberalismo es especialmente fuerte, como en Estados Unidos, por ejemplo, y he escuchado que aquí en Chile pasa lo mismo. Quizás Chile sea el “niño símbolo” del neoliberalismo. Entonces, uno de los riesgos que puede haber, y esta es una vieja manera

de pensar en la izquierda, es que deberíamos hacer abstracción de todas estas diferencias y concentrarnos en aquello que tenemos en común. Y esto generalmente se traduce en decir, por ejemplo, “no discutamos sobre feminismo y concentrémonos en una lucha común”. Yo creo que esto es un error y creo que, al contrario, lo que tenemos que hacer es, precisamente, mostrar cómo todas estas formas de opresión y estas diferentes condiciones -primero debemos reconocer que son diferentes y que debemos analizarlas como diferentes formas de opresión- se hallan internamente conectadas. No son fenómenos independientes, están conectados entre sí y conectados a los mecanismos del capitalismo. Por lo tanto, cuando articulamos demandas local o internacionalmente, esas demandas tienen que tener en cuenta toda esta diversidad, pero al mismo tiempo tienen que tener en cuenta el hecho que todas estas formas están conectadas entre sí. Entonces efectivamente tenemos enemigos en común y tenemos necesidades comunes. Es algo difícil, pero creo que el movimiento lo está haciendo. La interseccionalidad ha sido muy útil desde esta perspectiva, al enfatizar la necesidad de tener en cuenta la condición específica de las mujeres negras, al abandonar esta idea de que hay una mujer universal, de que somos todas iguales y hermanas y en insistir en la idea de que nos volvemos hermanas a través de la lucha. No es que ya seamos hermanas, que ya estemos en hermandad, sino que es a través de la lucha que podemos construir esa hermandad. Al mismo tiempo, lo que a menudo falta en la interseccionalidad es la noción de conexión interna y estructural entre estas diversas formas de opresión y desde esta perspectiva el feminismo marxista, la teoría de la reproducción social, está haciendo un aporte enfocándose en esto. Entonces en el *Manifiesto...*, de lo que hablamos es básicamente de una forma de feminismo universalista, de un feminismo para todo el mundo, de liberación para todos y todas, pero de un universalismo que no está basado en abstracciones vacías como “la mujer”, sino más bien de un universalismo que está hecho de las conexiones e interconexiones entre diversas perspectivas y formas de opresión.

En tus trabajos sobre feminismo y marxismo has insistido en la necesidad teórica de comprender las relaciones entre patriarcado y capitalismo desde una perspectiva unitaria, es decir, de entender que la opresión sexual, que el patriarcado, no son sistemas autónomos, sino que son formas de dominación producidas y reproducidas por el capital. Ahora bien, entendemos que para ti esto no se trata de una discusión “académica” sino de un problema político. ¿Por qué es relevante políticamente mirar la opresión sexual desde esta perspectiva? ¿Cuáles son las potencialidades políticas que una perspectiva unitaria aporta para la lucha anticapitalista? ¿En qué se traduce esto en términos políticos?

La contribución política es precisamente que, si analizamos los mecanismos que producen las opresiones, pero también las jerarquías entre las mujeres, entonces, a través del lente de la reproducción social y de los efectos que el capitalismo ejerce sobre la reproducción social, podemos identificar programas o demandas políticas que nos ayuden a todas/os. Un ejemplo feminista típico es el aborto. Ahora bien, generalmente el movimiento feminista se ha concentrado solamente en el derecho al aborto, pero esto era dejando fuera otro aspecto del problema de la autonomía sobre el cuerpo, que es el derecho a la reproducción; y esto aplica especialmente para las mujeres negras, las mujeres racializadas. En otras palabras, mientras que las mujeres blancas en Estados Unidos, por ejemplo, son incentivadas a tener hijos/as, las mujeres negras son concretamente, no solo en palabras, desalentadas a tenerlos/as. Históricamente ha habido esterilizaciones masivas, por ejemplo, en las prisiones y también los costos de la reproducción son tan altos que claramente las mujeres pobres y negras por lo general tienen problemas de acceso a la posibilidad misma de tener hijos/as. Entonces en Estados Unidos ahora se habla de “justicia reproductiva” y no solamente de aborto. La justicia reproductiva incluye un sentido de autonomía del cuerpo que considera precisamente el derecho a no tener hijos y a tenerlos cuando quieras tenerlos. Concretamente, esto significa una demanda no solamente por aborto libre y por lo tanto

atención de salud pública para un aborto libre, sino también atención de salud pública para la reproducción. De este modo se puede luchar juntos. Porque en los años '70, como señala Angela Davis en *Mujeres, raza y clase*, lo que ocurría era que el movimiento era predominantemente blanco y se concentraba solamente en el aborto y la anticoncepción y ese tipo de cosas, pero para las mujeres negras esto era percibido como otro intento más por excluirlas de la reproducción. Entonces hemos aprendido la lección y ahora la lucha es por la justicia reproductiva y esto significa que queremos, por ejemplo, atención de salud pública.

En el mismo libro sostienen la necesidad de superar el feminismo liberal, blanco y elitista, representado por figuras del estilo Hillary Clinton. Sostienen además que ese feminismo liberal está en bancarrota y se ha mostrado impotente para detener los avances conservadores, como lo muestra el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, en países como el nuestro, donde todavía no tenemos cuestiones básicas de cualquier ideario liberal, como el derecho al aborto, y donde culturalmente el peso del conservadurismo y de la religión son todavía muy grandes, vemos que propuestas propias del liberalismo en términos de autonomía y libertad individual, de libertad para elegir, de empoderamiento e igualdad de oportunidades, tienen una adhesión importante entre las mujeres que se han acercado al feminismo en los últimos años. ¿De qué manera crees que un feminismo para el 99%, un feminismo anticapitalista, tiene que relacionarse con el feminismo liberal, en contextos donde, a diferencia de lo que ustedes plantean para Estados Unidos y Europa, este no está necesariamente en bancarrota, sino que tiene todavía capacidad de procesar los malestares de las mujeres?

Creo que es lo mismo que en Italia o en otros países. Pienso que, por ejemplo, si organizas la lucha por el aborto, en un sentido puedes tener alianzas, alianzas políticas en la lucha con el feminismo liberal. Pero lo que es importante es articular una perspectiva alternativa al feminismo liberal. En otras palabras, no apoyarse solamente en su narrativa, no hablar solamente de “libertad de elección”, sino hablar de sistema de salud pú-

blica, de justicia reproductiva; en Chile, justicia reproductiva para las mujeres mapuche. Entonces, claramente hay algunos elementos, incluso derechos formales, respecto de los cuales se puede tener un punto de conexión, como alianzas provisionales. Pero lo importante es no abandonar la radicalidad del movimiento para lograr estas alianzas. Las alianzas deben ser entre fuerzas que de todos modos tienen perspectivas políticas diferentes, lo que significa que una perspectiva de feminismo anticapitalista tiene que ser articulada de manera crítica con el feminismo liberal, pero que, a la vez, en casos como manifestaciones a favor del aborto, este sea bienvenido a sumarse. Pueden participar de la lucha, pero tiene que estar claro que hay una diferencia, de que hay dos ideas muy diferentes sobre lo que es el feminismo. Entonces, ¿cómo articular? Esto localmente no lo sé, porque depende de las circunstancias específicas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del aborto, inevitablemente hay una especie de alianza, por así decirlo, con feministas democráticas-liberales, que hablan de la libertad de elección, que quieren defender el aborto, porque el aborto es básicamente imposible en varios estados, pero lo que es importante es que lo que estamos haciendo no se apoye en sus consignas, en su análisis; nosotras estamos organizadas en torno a nuestra propia perspectiva, nuestras propias consignas y nuestro propio análisis.

PUGNAS EMPRESARIALES, CRECIMIENTO Y DESAFÍOS GUBERNAMENTALES

Carlos Ruiz

Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile
Presidente de Fundación Nodo XXI

Sebastián Caviedes

Sociólogo de la Universidad de Chile
Director de Cuadernos de Coyuntura

***E**l artículo aborda la tensión sobre el proceso político democrático que plantea la urgencia para el empresariado de ajustes estructurales al patrón de crecimiento chileno. Un fenómeno que, además, se erige como demanda que recae sobre el gobierno, marcando el escenario que viene en los próximos años. Se plantea que este mapa político, que marca los desafíos del liderazgo presidencial, también abre oportunidades para la oposición y, especialmente, la izquierda.*

El cierre del primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera estuvo agitado. Y es que, entre los meses de noviembre y enero se registraron una serie de hechos políticos relevantes, que entregan luces sobre las prioridades y estrategias del Ejecutivo para los tres años que le restan, a la vez que evidencian los desafíos que enfrenta un liderazgo presidencial cuyo principal anhelo es proyectar políticamente su legado.

En específico, se trata de una serie de pugnas empresariales asociadas al interés de ciertas franjas políticas y económicas por construir consensos que permitan sortear las debilidades del modelo de crecimiento, predominante desde la refundación capitalista de los años setenta. En tal sentido, se analizan las aristas asociadas a este escenario económico general, así como sus efectos en las correlaciones centrales de fuerza, proponiéndose para ello una interpretación respecto a las tensiones que sobre el proceso político democrático y como demanda para el actual gobierno de Sebastián Piñera, abre este suceso.

1. El fin de año y las pugnas que asoman en la derecha

El entrampamiento del Plan Araucanía

El primer hecho político a destacar es el mal pie en el que ha quedado el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía promovido por el Gobierno y, particularmente, su componente económico: el Plan Impulso Araucanía. En efecto, el asesinato del joven dirigente mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temuicui en Ercilla, a manos de un grupo militarizado de Carabineros, desató un amplio cuestionamiento —dentro y fuera de la región— al actuar de Carabineros y del Ministerio del Interior tanto por la violencia y descontrol mostrado por los uniformados, como por las inexactitudes reiteradas en el manejo de la crisis, que incluyeron informaciones falsas, borro de imágenes e intentos de justificación a lo ocurrido en razón de un supuesto robo perpetrado previamente en una escuela cercana.

Este Plan, eje de la política económica y de seguridad del Ejecutivo en la región, tiene como sus pilares la inversión social en obras de infraestructura vial y sanitaria y en servicios sociales,

así como la promoción de emprendimientos productivos con apoyo de la Corfo y algunas medidas de reconocimiento hacia el pueblo mapuche. En torno a él, además, los actores sociales y políticos de la región han sido convocados a una serie de instancias de diálogo, cuyo criterio de inclusión ha sido fijado en la no participación en lo que el Gobierno define, muy laxamente, como hechos de “violencia rural” o terrorismo. En particular, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha encabezado reuniones con un grupo transversal de representantes del mundo mapuche y no mapuche, logrando convocar, dentro del primero, sobre todo a sectores ligados a demandas más de índole económica y cultural —como la Confederación Económica Mapuche y el Consejo de Loncos de la IX región—, que de autodeterminación nacional. Por su parte, dentro del mundo no mapuche, Moreno ha logrado convocar a la mayoría de los gremios productivos de la región y a representantes de los grandes grupos económicos que allí tienen operaciones, así como a sectores políticos diversos, incluyendo a parlamentarios de oposición.

Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, sin embargo, este acercamiento se ha entorpecido fuertemente. Y es que ha quedado en evidencia la distancia entre lo propugnado por el ministro y la violenta realidad de atropello aún desplegada sobre el pueblo mapuche. Pero, además, y como consecuencia de tal situación, se ha producido un reagrupamiento de los grupos que, cercanos ideológicamente al Gobierno, tienden hoy a desbordarlo, recibiendo de modo distante el Plan Impulso Araucanía por sus escasos beneficios de corto plazo y alimentando, a su vez, el enfrentamiento directo con las comunidades mapuche y un recrudecimiento de la militarización en el territorio¹. Se trata de un escenario habitual en las últimas décadas, en una zona que, desde hace varios gobiernos atrás, viene expresando los efectos de la captura del Estado a manos de grupos empresariales locales que le imprimen este sello de violencia. En tal sentido, los recientes hechos de descontrol policial en la región, inexplicables a ojos de quienes concentran las culpas sólo en el mando civil, así como el cuadro de desborde político que afecta al Plan impulsado por Moreno² como consecuencia de esta radicalización, encuentran sus raíces profundas en el mismo proceso.

1 Cooperativa. (2019, 15 de enero). Agricultores de La Araucanía llegan armados a fundos en toma y bajan banderas mapuche. *Cooperativa.cl*.

2. A partir de los positivos indicadores que el Plan ha mostrado tras su primer año de implementación, con un crecimiento económico sobre la media nacional y un desempleo por debajo de esta —merced a iniciativas de electrificación rural, subsidios a la vivienda y construcción de Liceos Bicentenario—, el ministro, junto al intendente Atton, han vuelto a la carga para reimpulsar el diálogo cortado desde el pasado mes de marzo. Ver Fuentes, V. (2019, 9 de marzo). Ministro Alfredo Moreno se reúne con loncos y reimpulsa diálogos en favor de la paz. *El Mercurio*.

El paro portuario y el grupo Von Appen

A lo ocurrido en La Araucanía, durante el mes de diciembre se sumó el paro de los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso, que incluso amenazó con impedir la realización de la tradicional celebración de año nuevo en la ciudad. Empujados por la caída en la cantidad de turnos de trabajo, producto de la fuerte competencia con el puerto de San Antonio, alrededor de 600 operarios de las terminales Cerros de Valparaíso (TC-VAL) y Pacífico Sur (TPS) paralizaron en rechazo a sus precarias condiciones laborales y a la ausencia de una legislación que les garantice derechos laborales mínimos. Aunque resuelto tempranamente en el primer caso, el movimiento de protesta se extendió por la negativa a negociar de TPS, filial del holding Ultramar, de propiedad del grupo Von Appen, que, lejos de abandonar sus acciones de amedrentamiento, contribuyó a que el conflicto escalara hasta el punto de hacer necesaria la mediación del Gobierno.

Ese involucramiento —vía los ministros del Trabajo y de Transportes—, que acusó tanto el potencial costo político y económico de la eventual no realización de la celebración de fin de año, como el que para la economía chilena en su conjunto comenzaban a significar los días de semi paralización del puerto, produjo, *de facto*, una reposición del esquema tripartito de negociación sindical, a contramano de la dinámica de prescindencia estatal para con los trabajadores que ha dominado desde la dictadura. El Gobierno, desdiciéndose de su propia definición inicial del conflicto como uno “entre privados”, decidió actuar como garante para lograr la firma de un acuerdo.

Sin embargo, justamente ese mismo carácter “tripartito” fue lo resistido por el grupo Von Appen, que, ocupando el poder de presión que le entrega su control sobre una parte importante del flujo de los puertos (vía concesión), se negó sistemáticamente a mejorar su oferta y a legitimar una mesa de negociación en la que también estuviera presente el Ejecutivo. Esto obligó al Gobierno, para poner término a unas manifestaciones que amenazaban con extenderse a otros puertos del país, a canalizar recursos estatales para alcanzar el piso mínimo de demanda exigido por los trabajadores de TPS (en la forma de cursos

de capacitación, mayormente) y a comprometerse a gestar una evaluación a la ley portuaria, a las pensiones de los operarios eventuales, y a posibles represalias o “listas negras” por parte de la empresa.

Este nuevo episodio de desborde del gobierno, perpetrado por el holding naviero de origen alemán, transcurrió, inclusive, pese a la posición adoptada por el Presidente de la República y el líder del gran empresariado, Alfonso Swett, quienes enfáticamente llamaron a la empresa a dejar atrás la intransigencia por los altos costos que traía al país³. No obstante, ella se mantuvo, sin ceder en ningún punto de la oferta reactualizada a comienzos de diciembre, que, de todos modos, estaba muy lejos de lo exigido por los estibadores.

En realidad, la salida finalmente pasó por un Gobierno que, sin poder torcer la mano a este poder económico, debió poner parte de su capital político en juego para procesar el conflicto, quedando un antecedente de su debilidad frente a un sector relevante del gran empresariado más rentista del país, no dispuesto a establecer ninguna clase de pactos con sus trabajadores. Una decisión que actualmente, y justamente por la cuota de poder que maneja, vuelve a transparentarse, en circunstancias que, tras cuatro meses de firmado el acuerdo, aún sigue habiendo personas sin posibilidad de trabajar como represalia a su participación en la huelga⁴.

La “guerra de la jibia”

La propuesta interpretativa antes mencionada, por último, también es extensible a la denominada “guerra de la jibia”, que sacudió el primer mes del año 2019, enfrentando a los pescadores artesanales y trabajadores de la pesca industrial de la zona sur del país. Este conflicto se gestó tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que declara ilegal la pesca de la jibia a través del sistema de “arrastre”, que utilizan los industriales, permitiendo únicamente atraparla por medio de técnicas artesanales como la “potera” o “línea de mano”. Tal situación gatilló el rechazo de los trabajadores de las pesqueras industriales, que se movilizaron en Talcahuano y Concepción.

³ El Mercurio. (2018, 17 de diciembre). CPC y paro portuario: Abogamos porque diálogo entre Gobierno, empresa y trabajadores se produzca lo antes posible. *El Mercurio*; y Diario Financiero. (2018, 19 de diciembre). Piñera golpea la mesa: “Se acabó el tiempo de las intransigencias de las empresas y los trabajadores”. *Diario Financiero*.

⁴ Soto, A. (2019, 14 de marzo). Portuarios exponen en Cámara denuncia por “listas negras” e incumplimiento de acuerdo con TPS. *Biobío Chile*.

Ante ello, el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Economía, José Ramón Valente, reaccionó proponiendo la posibilidad de un veto presidencial que permitiera incorporar el sistema de “cerco”, que sí entregaba una alternativa de pesca a los industriales. Sin embargo, la inviabilidad técnica de esta alternativa —presentada como una suerte de opción intermedia entre la “potera” y el “arrastre”— fue evidenciada rápidamente por expertos y parlamentarios, inclusive de la propia coalición oficialista. Un paso en falso que provocó que, al reclamo de los trabajadores industriales, se sumara el de los pescadores artesanales de las regiones del Maule y Biobío, quienes exigieron la anulación de tal veto. Esto terminó produciendo el retroceso del Ejecutivo, que decidió volver al proyecto original, en una decisión que fue duramente criticada por los gremios industriales y los grandes empresarios del sector.

Así pues, de modo similar a como ocurriera en La Araucanía y Valparaíso, este conflicto entre poderes económicos supuso, a la postre, el desbordamiento de la capacidad de procesamiento de conflictos del actual gobierno, a manos de una presión empresarial desbocada. Una que, por cierto, se cruza, en el caso de la pesca, con la molestia del sector industrial por el rumbo adoptado por la Ley de Pesca promulgada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, hoy en el Congreso más cerca de la nulidad —con votos del oficialismo—, pese al alegato de la “incertidumbre jurídica” y el carácter “expropiatorio” que una resolución de este tipo provocaría⁵. Un reclamo que, reafirmando las tensiones que actualmente se experimentan al interior del actor empresarial, no representa necesariamente la opinión general de este último, en tanto han emergido voces que apuntan a la improcedencia de mantener esta ley y a la inviabilidad de una posesión de derechos de extracción a perpetuidad o por muy largos períodos, habida cuenta de la crisis experimentada por el fondo marino en Chile⁶.

2. Notas sobre el agotamiento del modelo de crecimiento

El origen de los conflictos antes mencionados, originados en pugnas empresariales que han finalmente desbordado el afán

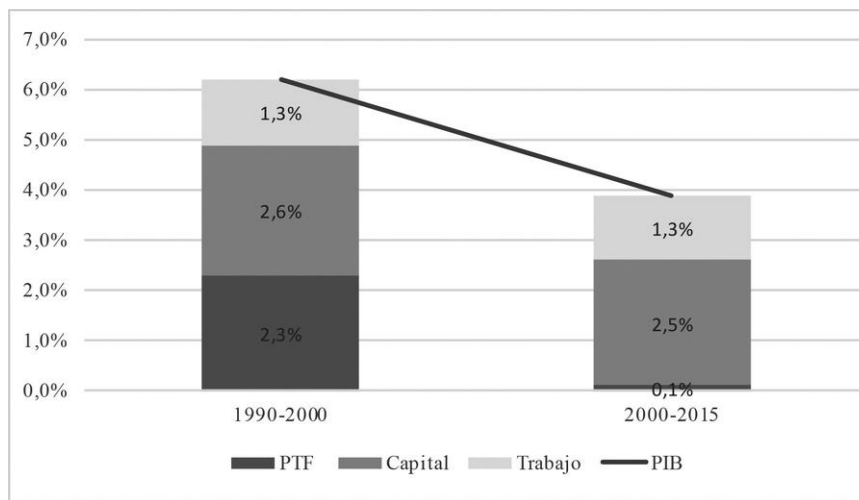
5 Pérez-Cueto, C. (2019, 18 de enero). Empresario pesquero, Roberto Izquierdo: “Este es un gobierno populista y débil”. *La Tercera*.

6 Álvarez, F. (2019, 22 de enero). Líder de los grandes empresarios califica como “lamentable” las declaraciones de Roberto Izquierdo. *La Tercera*; Tapia, M.J. (2019, 24 de febrero). Director de empresas y ex presidente de La Polar, César Barros: “El empresariado ve cada vez más probable que se elija a un próximo Presidente de centroderecha”. *La Tercera*.

gubernamental por procesarlos, puede encontrar su explicación, en buena medida, en los indudables signos de agotamiento que ha venido mostrando, durante largo tiempo, la tasa de crecimiento de la economía chilena.

En efecto, con pocas alteraciones a lo largo de los años, lo emanado de las reformas estructurales que impulsaron la refundación capitalista hace más de cuatro décadas dibujó una estructura económica en cuyo centro han estado el sector externo -principalmente, la minería del cobre-, de servicios y financiero. En razón de este esquema, según datos de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), en los años noventa se produjeron elevadas cifras de crecimiento económico sobre la base de un aporte sostenido de todos los factores productivos, incluyendo el capital (2,6%), el trabajo (1,3%) y la productividad total de los factores (PTF) (2,3%). Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, lo que ha pasado a explicar el crecimiento del PIB es cada vez más un mayor capital y trabajo, en desmedro de una PTF que ha caído fuertemente hasta llegar al 0,1% en el período 2000-2015 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Aporte de la PTF al crecimiento del PIB por período



Fuente: Ramos, J. (2018, mayo). *La productividad en Chile: desafío y oportunidad*. CNP, p. 9.

7 Magendzo, I. y Villena, M. (2013). *Evolución de la productividad total de factores en Chile*. Santiago: Corfo-UAI..

En concreto, desde el año 2005 se viene produciendo una desaceleración sostenida en la tasa de productividad. Correspondiendo la PTF a una medida sobre la calidad y uso de los factores productivos —en la cual intervienen componentes disímiles como la calidad de la fuerza de trabajo, el nivel de deterioro de los recursos naturales, el de inversión en I+D y las eficiencias en el comercio internacional y en la reasignación de los factores entre empresas—, si bien en la baja en la productividad agregada de la última década y media han sido muy importantes la caída en la ley o grado de pureza del cobre y el deterioro en la disponibilidad de recursos hídricos (que, por ejemplo, ha terminado afectando la generación eléctrica y distribución de agua en varias zonas del país⁷), lo que entre los observadores ha abierto la pregunta por el potencial carácter estructural de esta desaceleración —y, así, por la inviabilidad en el largo plazo del modelo de crecimiento surgido en dictadura, más allá de sus variaciones coyunturales— es que aquella se ha venido manifestando transversalmente entre los sectores de la economía, sin que se haya podido retornar a tasas similares a las de la primera mitad de los noventa, con la excepción coyuntural del sector Servicios (Cuadro 2). Esta situación se observa, inclusive, al considerar solamente la economía no minera (Cuadro 1).

Cuadro 1. Medición de productividad (PTF) por período

Medidas de productividad	Período (años)							
	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016	2017	2018
PTF agregada	1991-1995	1996-2000	1,1%	-0,5%	-0,3%	-0,5%	-0,2%	1,3%
PTF sin Minería	3,7%	0,9%	2,3%	1,0%	0,6%	-0,2%	0,1%	2,3%
Fuente	Elaboración propia en base a datos y metodología de la CNP (Informe Anual 2016).							

Cuadro 2. Índice de productividad (PTF) sectorial por período

Sector	Período (años)						
	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016	2017
Agricultura, caza y pesca	5,8%	3,3%	6,7%	3,1%	0,9%	-0,1%	-1,0%
Minería	1,5%	2,5%	-8,1%	-8,4%	-8,5%	-3,6%	-2,6%
Industria	3,5%	0,9%	0,7%	-1,0%	-1,0%	-3,4%	0,6%
EGA	9,4%	-1,6%	1,8%	-6,3%	0,7%	-4,5%	-0,1%
Construcción	2,6%	-0,7%	2,1%	-1,7%	-3,0%	-1,4%	-2,0%
Comercio, Hoteles y Restaurantes	6,9%	-1,2%	3,1%	3,6%	2,1%	-1,7%	2,8%
Transporte y Comunicaciones	3,6%	2,9%	1,5%	-1,2%	2,2%	2,1%	1,4%
Servicios	1,8%	0,9%	3,0%	1,7%	-0,1%	1,1%	-1,4%
Fuente	Elaboración propia en base a datos y metodología de la CNP (Informe Anual 2016).						

Ciertamente, las causas profundas de esta situación hoy siguen siendo materia de debate, pues se trata de un fenómeno no exclusivo del caso chileno sino del mundo. No obstante, la evidencia disponible sí permite afirmar que la apertura comercial y las reformas liberalizadoras del pasado han entrado a rendimientos decrecientes en Chile, y que la escasez de los recursos ambientales a partir de una degradación creciente por una estructura productiva muy concentrada en los recursos naturales es ya una realidad ineludible.

Es así como se explica la necesidad reformista que, en el horizonte, aparece a nivel político y económico. Las reformas laboral, tributaria y de pensiones, pero también las de tipo ambiental — por ejemplo, al código de aguas —, surgen como tareas acuciantes para sortear esta constricción estructural de la tasa de crecimiento de la economía chilena. Una necesidad, cabe recordar, ya

visualizada en gobiernos anteriores, y que, por ejemplo, llevó al segundo gobierno de Bachelet a empujar medidas que apostaban a acrecentar la colaboración público-privada, en un intento por reducir los excesos del “capitalismo de servicio público” chileno, aunque sin tocar sus fundamentos (de hecho, reforzados en variantes de “colaboración” como las concesiones). Al respecto, la aceptación transversal que suscitara entre los sectores políticos y empresariales la gestión del ex ministro Máximo Pacheco para reducir los costos de mediano plazo de la energía, es quizás el mejor muestra de ello⁸.

En ese sentido, los sucesos de fin de año antes descritos son parte de la conflictividad y tensiones propias del agotamiento de las holguras que tiempo atrás permitía el crecimiento y, con ello, expresión de las dificultades de manejo político que, para un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera, plantea esta desesperación empresarial. Los grandes gremios empresariales, como se ha visto, intentan contener y ordenar, pero hasta ahora sin mucha suerte, anticipando que las dificultades de manejo político continuarán.

Por lo anterior, el escenario de las reformas estructurales que vienen será decisivo para observar este dilema. Es que, a mediano plazo, en la búsqueda por relanzar las tasas rentistas de crecimiento del modelo económico chileno, parece transparentarse cada vez más la necesidad de dejar de lado la primacía de actividades fundamentales en el ciclo anterior, pero que hoy se muestran agotadas (como la pesca); reimpulsar regiones antes desaprovechadas en todo su potencial productivo (La Araucanía); y superar algunas formas de control y explotación propias del neoliberalismo criollo, como las que caracterizan, por ejemplo, al grupo Von Appen, conglomerado cuya forma de acumulación, asociada a un rentismo de concesiones⁹, exhibe además los rasgos de una alta precarización laboral, en donde, al tener un carácter transitorio el grueso de la fuerza de trabajo empleada, se aleja incluso de la formalidad laboral más básica defendida hoy por el Gobierno, relacionada con la existencia de contratos de trabajo.

Ahora bien, la urgencia por la construcción de consensos políticos que viabilicen reformas estructurales para destrabar las tasas de crecimiento no debe confundirse con un cambio en el modelo

8 Ver, por ejemplo, Grupo de Estudio del Capital. (2014, agosto). Una agenda energética para el nuevo ciclo de acumulación empresarial. *Cuadernos de Coyuntura*, (4), pp. 33-42.

9 Una de las variantes del capitalismo de servicio público en Chile, junto a la privatización de los servicios públicos.

de desarrollo. Esto queda suficientemente claro en el tipo de recomendaciones que, para atacar el problema de la productividad, ha manifestado el Banco Central, quien ha llamado a enfocarse en la reasignación más eficiente de los factores productivos¹⁰. Vale decir, en una apuesta de corto plazo para sacar rendimiento a la base productiva existente, sin necesariamente torcer el sentido del desempeño productivo actual. Esto explica en buena medida, por ejemplo, que se hayan tornado temas de relevancia económica el procesamiento de la inmigración altamente educada que ha llegado a Chile en los últimos años —y que experimenta un desajuste entre el tipo de empleo al que accede y el nivel de escolaridad que posee— o el rol de las pymes —en la medida que, en un país donde la mayoría de los mercados se encuentran concentrados, las brechas de productividad con otros países se dan mucho más entre las grandes empresas que entre las de menor tamaño¹¹—.

3. Los desafíos de Piñera y la oportunidad política de la oposición

En un escenario político todavía muy cambiante, en el que aún no es posible establecer asociaciones claras entre actores políticos y fuerzas sociales específicas dentro de la derecha, el cierre de año trasluce las pugnas que emergen de la urgencia de ajustes estructurales al patrón de crecimiento para el empresariado rentista chileno. Un fenómeno que plantea una tensión sobre el proceso político democrático, así como una demanda sobre el actual gobierno que marcará el escenario que viene.

En particular, estas asperezas, en circunstancias de una oposición aún sin proyecto y con escasa articulación, ha terminado por sobredeterminar todo el escenario político, marcando aún los puntos de conflicto que guían la agenda pública, y dejando a la oposición como mero espectador —a lo sumo, reactivo— de unas disputas que estallan en otros campos de lucha.

Tal como el año pasado, durante 2019 es altamente probable que sigan presentándose estas disputas que tensionan la base de apoyo del Gobierno, enfrentándose las fracciones empresariales más conscientes de las debilidades del actual modelo con aquellos sectores rebeldes del empresariado y la derecha política que aún

10 Banco Central. (2017, septiembre). *Crecimiento tendencial: proyección de mediano plazo y análisis de sus determinantes*. Santiago: División de Estudios del Banco Central de Chile.

11 Comisión Nacional de Productividad (CNP). *Informe anual 2018 de productividad*. 17 de enero de 2019.

no están abiertos a construir consensos sociales que, sin dudarlo, pondrían presión sobre sus formas de control y acumulación vigentes. Sin duda, a esto último ayuda el panorama internacional de radicalización de la derecha a nivel global, aunque lo conflictivo de este proceso local no pueda ser atribuible directamente a tal fenómeno, toda vez que su esencia radica en los rasgos específicos del capitalismo chileno de las últimas décadas.

En ese sentido, serán fundamentales las estrategias de procesamiento de tales tensiones que vaya adoptando el gobierno en los años venideros, pues ellas pueden ser indicadores del tipo de estrategia de crecimiento buscará defender para un nuevo ciclo económico y político. Hacerlo, así como acercar posiciones entre estas fracciones en pugna, será lo que ponga a prueba el liderazgo del Presidente. El sentido en que se resuelvan las reformas al sistema tributario y las AFP, por ejemplo, sindicadas como los grandes desafíos legislativos del año 2019, hablan directamente de esto.

Por el lado de la oposición, la necesidad de reformas al actual modelo de crecimiento y las disputas que por ello surgen entre los sectores dominantes constituyen una gran oportunidad política para el impulso de los intereses sociales que eventualmente puede representar. Concretamente, porque tal ajuste, que puede ser parcial, también puede ser empujado en un sentido estructural, quitando poder a los intereses empresariales en favor de una mayor democratización social y política. Y es que este mapa político presentado debería abrir en las fuerzas de oposición y, particularmente en la izquierda, un debate sobre las limitaciones del modelo de desarrollo vigente y, particularmente, sobre las capacidades de integración social de este, muy reducidas por su carácter fuertemente rentista.

Con todo, la disputa por el signo, carácter y profundidad de las reformas estructurales sólo podrá producirse si es que, además de una actuación coordinada, emana de tal discusión una agenda de cambios clara y distinta a la del Gobierno. Es decir, un horizonte sustantivo en el que se asiente la unidad de la oposición, aunque sin renunciar a las diferencias legítimas que puedan existir entre cada una de las identidades políticas que la compongan.



LA POLÍTICA MILITAR DE LA TRANSICIÓN Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Fuente: quepasa.cl

Martín Sanzana

Doctor en Planificación, director centro INEDH Concepción.

***P**ara las fuerzas políticas que se plantean como alternativa frente a la derecha y los derivados de la Concertación, los episodios recientes de corrupción, montajes e insubordinación en las fuerzas armadas y policiales demandan una reflexión de mayor alcance sobre las tareas pendientes en la relación entre militares y sociedad, así como delinear con más claridad los rasgos de una política propia en materia de defensa.*

Núcleo formador del Estado. Guardia pretoriana de los intereses oligárquicos/burgueses. Subsistema burocrático-meso-crático modernizador. No cabe duda que los militares han sido determinantes en la conformación de la sociedad chilena. Su decisiva influencia en configurar el actual régimen es por todos conocida, tanto por la refundación económica, social y político-constitucional que impusieron durante la dictadura, como por su poder de veto en la transición democrática. Aún así, de tiempo en tiempo, vuelve a emerger desde la sociedad la constatación de un desconocimiento acerca de los militares, sus instituciones y sus formas de relación con los distintos grupos sociales. Para la izquierda ese déficit en conocimiento y elaboración política ha resultado problemático, ya sea causado por vacíos teóricos o por querellas históricas. Pero la escasez de reflexión y política pública al respecto no es un problema cualquiera ni se limita a un sector en particular. En última instancia se trata de reconocer -y reducir- los factores que limitan el legítimo ejercicio de gobierno y, por ende, las posibilidades de transformación y mejoramiento social, algo relevante a considerar en el contexto de fin de ciclo político.

Tras contextualizar las relaciones cívico-militares y políticas de defensa recientes, en el presente texto se sugiere que el problema central que emerge sobre la política militar de la transición no es tanto de continuidad, sino de búsqueda de nuevos enfoques.

1. El pinochetismo como determinante de las relaciones cívico-militares

Hasta fines de los años sesenta la imagen social predominante sobre los militares en Chile era de austeridad, ensimismamiento y no deliberación. Pero en ese mismo periodo décadas de relativa desmejora en sus condiciones materiales institucionales¹ se fueron combinando con una modernización trunca orientada por los Estados Unidos con énfasis en la doctrina de seguridad nacional². Durante el gobierno de la Unidad Popular, el sistema político no logró procesar las demandas cruzadas de modernización, seguridad y democratización motivadas por transformaciones en la estructura social

1 Hansen, R. (1967). *Military culture and organizational decline: a study of the Chilean army* (Doctoral dissertation, University of California Los Angeles).

2 Joxe, A. (1970). *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*. Santiago: Editorial Universitaria.

y la descomposición de las relaciones entre y al interior de las clases, en partículas las medias de las cuales los militares formaban parte como asalariados estatales. Con el golpe de estado de 1973, las fuerzas armadas ocuparon militarmente el Estado, el territorio y las relaciones sociales, cual pequeño Leviatán. Aunque subordinadas al proyecto neoliberal, mantuvieron para sí mismas espacios de excepción más bien desarrollistas. Bajo la sombra bélica sortearon los ajustes monetaristas de los años setenta, expandiendo significativamente su presupuesto entre 1975 y 1981. Aumentaron su autonomía corporativa indexando ingresos a las ventas netas de la estatal Codelco. Se eximieron de reformas en salud, trabajo y previsión, continuaron en barrios militares segregados y con una esfera de justicia propia. Su propia acción insurreccional y subordinación a un caudillo sanguinario contribuyó a separarlos del mundo civil, lo cual se profundizó con la Constitución de 1980, donde la soberanía se desplazó desde el “pueblo” a la “nación”, con las fuerzas armadas guardianes designados del orden institucional.

Aunque hay quienes afirmen que con un lápiz y papel se derrotó a Pinochet”, hay abundante testimonio que la resistencia al régimen fue muy sacrificada e incluyó diversas formas de rebelión. Ni tampoco la derrota del SI resultó absoluta. Los militares llegaron a la transición con el mando y la capacidad militar intactos, algo que Pinochet usó para forzar una forma de coexistencia político-militar. Tras imponer una profunda y radical reestructuración social, lograron de sus principales adversarios políticos la aceptación explícita del marco institucional existente y su adhesión a un modelo económico capitalista. Durante la transición los objetivos de las fuerzas armadas fueron asegurar sus prerrogativas constitucionales de veto, defender la amnistía de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos (sobretudo al propio Pinochet), y resguardar niveles de plena autonomía en el financiamiento y gestión de la defensa nacional³. En contrapartida, la Concertación desplegó una *realpolitik* que buscó “asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente del poder”⁴. Mediante tácticas distractoras, de contención y ocasionales *gallitos*, se trató de neutralizar el sabotaje del círculo pinochetista

3 Fuentes, C. (2006). *La transición de los militares*. Santiago: Lom Ediciones.

4 Böeninger, E. (1997). *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello, p. 395.

que como fuerza política armada que resguardaba su espacio vital de poder e impunidad. El gobierno de Aylwin privilegió alcanzar una supremacía civil, tratando de establecer sino la autoridad al menos el reconocimiento del Ministerio de Defensa y regularizando la existencia de un Estado Mayor de la defensa, sin resolver problemas de subordinación política, excesiva autonomía, falta de integración y coordinación de y con las fuerzas armadas, ni menos la salida de Pinochet.

Una Concertación incapaz de realizar su victoria en el plebiscito de 1988, es decir, desarticular las relaciones que sostenían la reproducción del poder social del adversario, renunció a resolver los problemas militares de la lucha democrática: el desarme y desarticulación de la dirección política del pinochetismo en las fuerzas armadas⁵. Incentivando los planes de modernización y lineamientos estratégicos presentados por cada arma, la Concertación apostó a la profesionalización para limitar gradualmente la capacidad de intermediación de Pinochet. La búsqueda de verdad y justicia en el tema de los derechos humanos respondió a la presión de las propias agrupaciones de víctimas y sus familiares, aunque también por cálculo político el gobierno impulsó medidas como el informe Rettig y políticas de reconciliación que mejoraron su capacidad de negociación frente a los militares, apuntando a acelerar la pacificación política. Aunque se habló de “vuelta a los cuarteles”, no se afectaron los roles constitucionales de tutela militar sobre la democracia que legalmente situaban a los comandantes en jefe “fuera” de los cuarteles.

En el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se aceleró la modernización y reorganización operativa de las distintas ramas armadas y se multiplicaron los acuerdos de cooperación militar binacional, iniciándose un ciclo de grandes y costosas adquisiciones de material bélico. Bajo la fluidez de la “democracia de los acuerdos”, las relaciones con el Ejército se fueron distendiendo, a costo de cierta vista gorda de las autoridades civiles ante irregularidades y de un retrasar mayores controles y contrapesos a la excesiva autonomía de las fuerzas. Evidencias de corrupción en las fuerzas armadas han existido en todo el largo período dictatorial y transicional, con reportes en torno a apropiación ilícita

⁵ Gutiérrez, N. (2018). *El MIR vive en el corazón del pueblo*. Concepción: Ediciones Escaparate e Inedh.

y enajenación irregular de inmuebles, contrabando y tráfico de drogas y armas, y diversos modos de manejos impropios de fondos. Las transacciones que involucraron al hijo mayor del general Pinochet pueden leerse en esa clave de privilegios, mientras que las cuentas en el extranjero del propio Pinochet fueron justificadas como parte de la operación de repliegue y aseguramiento del núcleo del régimen. Tampoco acá se trató de hechos individuales sino de corrupción institucional, en tanto involucraron la responsabilidad de los mandos y así deberían haber sido juzgadas⁶. La elaboración del Libro Blanco de la Defensa Nacional en 1997 y 2002 fue un avance en el planteamiento de políticas de defensa desde el Gobierno y la búsqueda de mayor transparencia, pero el período marca también nuevas turbulencias generadas por la designación de Pinochet como senador y luego por su arresto en Londres. De allí surgen iniciativas de normalización cívico-militar como la mesa de diálogo para avanzar en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, asumida tácticamente por el Ejército como forma de asegurar el compromiso del gobierno con el retorno de Pinochet al país y marcar una etapa de mayor distanciamiento con el período dictatorial.

2. Progresión y agotamiento de la política militar de la Concertación

Junto al (lento) desprestigio de Pinochet en la derecha por el caso Riggs, se va reduciendo también el apoyo público de las fuerzas armadas a Pinochet. Con el general Cheyre en la comandancia en jefe, el Ejército desplegó nuevas iniciativas para normalizar las relaciones cívico-militares, incluido un polémico “nunca más”⁷, y buscó acelerar el cierre político del “desfile” de militares ante tribunales.. En contrapartida la tragedia de Antuco mostró la continuidad de una cultura interna de abuso jerárquico que dañó la imagen de profesionalismo del Ejército. Muy significativamente el año 2006 se promulgó la Ordenanza General del Ejército, como ejemplo de propuesta actualizadora de la mentalidad y el rol de los militares hacia una nueva etapa que evitara tanto el intervencionismo como el ostracismo. La

6 Tótoro, D. (1998). *La cofradía blindada: Chile civil y Chile militar: trauma y conflicto*. Santiago: Ed. Planeta; y Weibel, M. (2016). *Traición a la patria. “Milicogate”. El millonario desfalco de la Ley del Cobre: La historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile*. Santiago: Aguilar.

7 Rodríguez, J. (2018). *Historia de la relación civil-militar en Chile: Desde Frei Montalva hasta Michelle Bachelet Jeria*. Santiago: FCE.

Ordenanza promueve la interoperabilidad y polivalencia de las fuerzas en un conjunto de tareas que sobrepasan ampliamente la disuasión e incluyen la cooperación internacional, la cooperación al desarrollo nacional y la contribución a la unidad y cohesión nacional. De allí emerge el concepto de “profesionalismo militar participativo” que valida la acción institucional de los militares en la sociedad, respaldando de paso la demanda por los recursos y autonomía que estas aspiran. Casi simultáneamente, el gobierno de Lagos logra la aprobación de reformas constitucionales que redujeron la incidencia política de las fuerzas armadas.. Lo anterior sin dejar de respaldar la modernización material de las ramas, lo que significó entre 2002 y 2011 un incremento del gasto militar de US\$ 1.780 millones a US\$ 5.687 millones⁸. Todo ello supuso la culminación de una etapa de normalización cívico-militar.

Sin embargo, pese a los avances en materia de modernización de la gestión militar interna en ese periodo, tampoco se resolvieron los problemas estructurales de supervisión civil y contraloría a las fuerzas armadas. Como omisión destacada no se motivó suficientemente a que las fuerzas armadas avanzaran en la integración de dos temáticas que se han vuelto fuentes de tensión y conflicto: ambiente y asuntos indígenas. De la primera, las fuerzas armadas se han venido haciendo cargo lentamente, pero aún desde una combinación de versión empresarial (responsabilidad social y certificaciones de calidad) y discursos de amenazas ambientales globales que no asumen los impactos propios del modelo extractivista chileno en el ambiente y en la soberanía de recursos naturales. En el tema indígena los silencios son densos, al punto que en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, convocada por el Presidente Lagos y presidida por el ex Presidente Aylwin, se omitió cualquier participación de las fuerzas armadas.

Habiéndose aprobado en 2010 una reestructuración del Ministerio de Defensa que fortalecía el rol del Gobierno y pese al menor peso del pinochetismo, en los gobiernos de Michelle Bachelet, y en el primero de Sebastián Piñera se observa un estancamiento relativo de la agenda cívico-militar. Tanto como ministra de defensa y luego en su primera presidencia, una Ba-

8 Datos compilados por el Banco Mundial. Ver: <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.CD?locations=CL>

chelet auto-identificada con la “familia militar” apoya decididamente la proyección de los militares en operaciones de paz internacional, así como una mayor incorporación de las mujeres. Aunque respalda los incrementos de presupuesto, despliega una gestión que choca con las proyecciones de las fuerzas armadas de ocupar un mayor rol social. Esta tensión se evidencia con la crisis de la gestión del 27F, en la cual la Armada no comunica adecuadamente la alerta de tsunami; la ONEMI y la propia Presidencia no demuestran capacidad de mando sobre las fuerzas armadas para enfrentar la catástrofe, y el Ejército es llamado a hacerse cargo de la seguridad pública de las zonas afectadas y bajo toque de queda. En el segundo período de Bachelet aumentó la tensión con las fuerzas armadas, en particular el Ejército, en parte por la continuidad de los juicios de derechos humanos y en parte por la resistencia que generaba en La Moneda ese modelo militar participativo, que analistas definieron como la “extensión de sus roles mas allá de sus tareas profesionales”⁹, que no significaban deliberación pero sí un alto grado de autonomía en el ejercicio de esa polivalencia.

En cuanto a Piñera, ejerció en su primer gobierno un rol contradictorio en materia de defensa. Basada en el esquivo concepto de “seguridad ampliada”¹⁰, su propuesta de Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad no hizo más que tratar de reordenar gerencialmente la defensa hacia los problemas centrales de la gobernanza neoliberal globalizada, es decir, policiamiento de flujos económicos, información, recursos naturales, crimen organizado y la propia población. Multiplicando instancias nuevas y de baja consistencia (comité interministerial de seguridad, grupo de trabajo público-privado y comisión de participación ciudadana abierta a especialistas civiles) dicha directiva no abordó cuestiones cruciales en el ejercicio de la soberanía, los conflictos vecinales, la corrupción, o los asuntos pendientes en derechos humanos y normalización de la relación cívico-militar. Ambos, Bachelet y Piñera, desplegaron una política exterior voluntarista, contradictoria y no integrada con las políticas de defensa, que se fosilizó en un legalismo exacerbado y una idealización de la disuasión militar armamentista. Mientras Bachelet privilegió la integración regional con bastante inge-

9 Agüero, F., Fuentes, C., y Varas, A. (2017, 2 de enero). Fuerzas Armadas, fin de una época. *El Mercurio*.

10 Thauby, F. (2012, 7 de agosto). Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa: errores no forzados. *fernandothauby.com*.

nidad ideológica, en particular con Bolivia, Piñera supeditó la política exterior a los intereses comerciales, implementando con su Canciller Moreno la tesis de las “cuerdas separadas”, lo que culminó en una estruendosa derrota ante Perú en La Haya, convenientemente opacada gracias a los diferendos con Bolivia.

Con el agotamiento de la Concertación y la emergencia de una ultraderecha con referentes globales, la alianza Cheyre-Lagos como modelo de relación cívico-militar republicana perdió piso, y reemergieron los temas de derechos humanos.. Fue Piñera quien ejecutivamente cerró el penal Cordillera y señaló las responsabilidades históricas de los “cómplices pasivos” en las violaciones a los derechos humanos, catalizando el malestar del pinochetismo disperso en una corriente política más activa. Al mismo tiempo, desde el procesamiento de Pinochet, el Poder Judicial tomó una mayor iniciativa en los casos de violaciones a los derechos humanos, a lo cual los gobiernos de Bachelet respondieron con un activo programa de derechos humanos del Ministerio del Interior.

Mas allá de su eventual responsabilidad penal, el procesamiento de Cheyre operó ante el mundo militar como demostración del fracaso de la estrategia de los civilistas, y la confirmación de las teorías conspirativas de los militaristas, difundidas por el club de oficiales procesados. El tema de los derechos humanos, utilizado por la Concertación durante años como factor de cohesión política y moneda de cambio ante negociaciones con la derecha, adquirió en el debilitado gobierno de la Nueva Mayoría un mayor peso identitario. El intento de Bachelet de cerrar Punta Peuco al final de su gobierno provocó el *boicot* de parte de su gabinete, las críticas transversales del partido del orden, y más relevante aún, la deliberación de oficiales activos y en la reserva que manifestaron públicamente su rechazo a la medida, tácitamente amenazando ante nuevas acciones en ese sentido. No es casual que en el actual gobierno de Piñera, su coalición haya retrocedido en esa materia -tramitando indultos por causas humanitarias- y revelando la mayor influencia de la red de militares procesados en esas causas, lo que coincide con el avance de sectores de la derecha pinochetista por ahora encabezados por José Antonio Kast. Ese avance puede

incrementar la participación de militares en política, dependiendo de la velocidad de descomposición del sistema político y deslegitimación de las instituciones, cuyas consecuencias no es posible anticipar.

En las antípodas del neo-pinochetismo, el emergente Frente Amplio ha planteado algunas propuestas en política militar, en general bastante próximas a las de los analistas civiles, como derogar la ley reservada del cobre, escrutinio de la Contraloría, reformar la justicia militar, democratizar el acceso a la carrera militar, valorar los derechos humanos y la integración con el mundo civil, polivalencia activa de las fuerzas armadas en desastres y catástrofes naturales, extender el período activo de los militares, etc. Otros planteamientos se asocian más a los de las agrupaciones de derechos humanos, como la degradación y desvinculación de los militares condenados y la eliminación de símbolos celebrativos de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Quizás lo más interesante y poco desarrollado dice relación con la carrera única, que eliminaría la rígida división entre oficiales y sub-oficiales.

Los casos de los pertrechos, el *milicogate* y *pacogate*, las transacciones de inmuebles fiscales, los viajes, las comisiones por compra de armamento, o la venta de armas a narcos, sugieren que con la des-pinochetización institucional de las fuerzas armadas la corrupción no desapareció sino que mutó. Aunque el gasto militar total en Chile ha tendido a la baja desde 1988, situándose en torno al 2% del PIB¹¹, es un gran volumen de recursos en un contexto de múltiples necesidades, lo que ha contribuido a debilitar la credibilidad social de las instituciones militares. En lugar de objetivos políticos jerárquicamente definidos -fuesen estos lealtad, seguridad, chantaje o represión-, ahora el uso indebido de recursos y poder se lleva a cabo por redes que, al amparo de la discrecionalidad corporativa y de la debilidad de los sistemas de control, buscan meramente el enriquecimiento ilícito y el usufructo de privilegios irregulares. Estos son indicios de descomposición de la disciplina militar, y existencia de una cultura del aprovechamiento observable en otras esferas de la sociedad. Los efectos disruptivos de este fenómeno pueden profundizar las divisiones cívico-militares, fracturar la unidad

11 Datos del Stockholm International Peace Research Institute. Ver: <https://www.sipri.org/databases/milex>

de las fuerzas, e incluso socavar la efectividad de las instituciones de la defensa, aumentando la vulnerabilidad ante poderes corruptores y cooptadores internos o externos.

Frente a escenarios de corrupción militar e insubordinación policial de alto impacto mediático, el segundo gobierno de Piñera procedió a renovar casi la mitad del alto mando del Ejército, e ingresó indicaciones al proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre. Se aprobó también la extensión de la carrera militar para mitigar los elevadísimos costos previsionales de la defensa. En Carabineros, Piñera destituyó al General Director y renovó parcialmente el alto mando, ingresando un proyecto para obtener un mayor control administrativo y operativo de las policías por parte del poder civil. En ello sigue la recomendación de analistas civiles en cuanto a avanzar hacia mecanismos efectivos de control a la gestión, así como establecer un sistema de financiamiento más transparente de las instituciones militares y de orden, apuntando así a una mayor subordinación de éstas al poder civil legalmente constituido.

En febrero de 2019 se registraron simultáneamente fuertes aluviones en el norte y múltiples incendios en el sur del país. Frente a la contingencia, Piñera declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Bio Bío, Araucanía y Los Ríos. Con ese decreto una autoridad militar se hace cargo de coordinar a todos los organismos y servicios públicos en cada región, y queda responsable de la seguridad pública. Dicha medida, que no se aplicó sin embargo a la catástrofe del norte, había sido propuesta antes de los incendios por el cuestionado ministro del interior Chadwick como forma de restablecer el “estado de derecho” en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Ahora bien, dada la recurrencia en Chile de eventos catastróficos de origen geo-climático, agravados por históricas deficiencias en la planificación del ambiente construido y en la gestión ambiental, esta situación abre varias interrogantes respecto de la gestión del Estado en caso de catástrofes y el rol de las fuerzas armadas en éste.

3. Hacia una nueva política democrática de defensa

Repensar los problemas militares desde la vocación de transformación social demanda generar nuevos modos de visualizar la defensa de la sociedad y el rol de las fuerzas armadas. Ello implica revisar críticamente las metas concertacionistas de subordinación de los militares a los gobiernos civiles para asegurar la gobernabilidad neoliberal, superar la lógica predominantemente reactiva y parcelada de las reformas legales, y reconocer que la política de defensa no puede agotarse en la búsqueda de justicia a las violaciones de derechos humanos en dictadura. De allí emergen varios nudos críticos concatenados:

i. Relaciones cívico-militares. El factor último de incertidumbre con respecto a la defensa nacional no radica tanto en amenazas fronterizas sino en la incapacidad de la propia sociedad de re-generarse democráticamente. Sin desconocer posibles escenarios bélicos, s destaca la enorme dificultad del Chile contemporáneo en reconocer su heterogeneidad y definir modos legítimos de resolución de diferencias cohesionándose tras un proyecto común. Más que decretar reconciliaciones o regalar indulgencias, se requieren diálogos y acuerdos constituyentes que proyecten tareas basadas en mayor colaboración cívico-militar, y el reconocimiento histórico a grupos sociales y étnicos reprimidos militarmente. La defensa de la soberanía una tarea de la sociedad toda que no se puede delegar totalmente en un cuerpo armado sin engendrar distorsiones. Concebir fuerzas armadas como un cuerpo social aparte, y no como ciudadanos y ciudadanas en armas, difícilmente conduce a otro resultado que a una profunda división social, donde la parte más poderosa puede vencer y someter a la más débil pero nunca asegurar la unidad necesaria para defender al país en una era de turbulencias globales.

ii. Rol de las fuerzas armadas. Si relegar a los militares a los cuarteles aleja a su vez los civiles de los temas de defensa¹², no cabe por el contrario que los militares auto-asuman responsabilidades propias de los gobiernos civiles. Más que a relaciones de fuerza circunstanciales, la búsqueda de un equilibrio en esa materia debe supeditarse a acuerdos generados y ratificados

12. Varas, A. (1987). *Los militares en el poder: Régimen y gobierno militar en Chile, 1973-1986*. Santiago: Pehuén.

por una deliberación social colectiva. Así, la polivalencia militar no puede excusar a la clase política de profundizar la descentralización a nivel regional y local, en los cuales las fuerzas armadas suelen rutinariamente contribuir. Los gobiernos civiles tampoco pueden evadir sus responsabilidades en mejorar los sistemas de prevención y gestión de catástrofes, en las cuales las fuerzas armadas colaboran. Y es particularmente grave la decisión del actual gobierno de usar el estado de excepción para militarizar la Araucanía y proseguir una guerra no declarada contra los mapuche, maniobra antidemocrática de sectores políticos que buscan realizar con los militares tareas para las cuales no cuentan ni con la fuerza política ni acuerdo social suficientes. Propositivamente, en la reorientación del agotado modelo neoliberal podríamos aspirar también a que el complejo militar contribuya a una industrialización avanzada y no-extractivista, con un mayor rol estratégico del Estado, una renta justa de los recursos naturales, y frenando depredación ecológica y desestructuración social.

iii. Políticas públicas de defensa. Es fundamental que las agendas cortas se articulen con agendas de reforma intersectoriales y de largo plazo. Para ello las políticas hacia el subsistema militar deben considerar la urgencia de regenerar la política y conducir la sociedad hacia un proyecto común. Esto demanda generar una estrategia de defensa bajo la cual se reconozcan consensualmente los bienes públicos a proteger, se identifiquen las amenazas y se establezcan los medios legítimos para alcanzar objetivos de corto, mediano y largo plazo. A partir del replanteamiento geopolítico y actualización de la doctrina militar, se pueden considerar cambios organizacionales y en la carrera militar coherentes con las necesidades estratégicas. Todo ello supone además fortalecer una comunidad de defensa con funciones claras, autonomía de las partes y mayor protagonismo de la sociedad civil. También en el campo de políticas públicas está la pendiente desmilitarización de Carabineros y avanzar en políticas sociales integrales que incorporen aspectos de seguridad.

iv. Organización de la defensa. El marco actual de funcionamiento ha llevado a niveles altos de improvisación y descoordinación entre instituciones castrenses, políticas de Estado y políticas de gobierno. Subsarlo demanda mayor especificación legal y reglamentaria de las atribuciones, contrapesos y controles de cada instancia, sin menospreciar el ejercicio de liderazgo de la autoridad civil dentro de un esfuerzo de modernización, transparencia y des-burocratización de la gestión pública. Los mecanismos de gestión financiera deben apuntar a racionalizar y reorientar el gasto militar bajo orientaciones estratégicas, sancionando oportunamente las irregularidades. Reconociendo la singularidad de la profesión castrense, el debate sobre los altísimos costos de salud y previsión de las fuerzas armadas no debe separarse de una reforma global de la seguridad social en Chile, ni el debate sobre la duración de la carrera militar puede eclipsar la reflexión sobre los funciones, tareas y contenidos de esa carrera.

MIGRACIÓN EN CHILE:

NOTAS PARA PENSAR EL FENÓMENO DESDE LA IZQUIERDA

Enrique Riobó

Historiador de la Universidad de Chile

Encargado del Frente de Derechos Humanos del Partido Comunes

Pablo Rojas

Psicólogo social

Miembro de ONG de Desarrollo Attas-Fractal

Pablo Seward

Candidato a Doctor en Antropología en la Universidad de Stanford

*L*a autoimagen que se promueve desde Chile hacia el extranjero como un país moderno y crecientemente desarrollado, sumado a la efectiva estabilidad política y económica de las últimas décadas, ha convertido al país en un polo regional migratorio. Ante esta realidad se ha vivido un creciente proceso de politización del fenómeno migratorio en el país. A pesar de ello, en la actualidad existe solamente un proyecto político sobre el tema. Este proyecto viene desde la derecha y se encuentra en franca contradicción con un enfoque de derechos, así como con las posiciones que la sociedad civil organizada ha manifestado en torno al tema, pero parece tener un amplio apoyo ciudadano. Ante esta coyuntura, la tarea para la “izquierda” como bloque de oposición, sugerimos, es abordar frontalmente una serie de tensiones y situaciones espinudas para así avanzar hacia una posición concreta que pueda aportar a la creación e institucionalización de un proyecto político alternativo.

1. Actualidad de las políticas de migración en Chile

En la actualidad se está tramitando una nueva ley de migraciones. Era un consenso la necesidad de una regulación, pues la actual, que viene de la dictadura, se encuentra obsoleta tanto por su enfoque de seguridad nacional como por su desajuste con la realidad actual.

De hecho, en las últimas cuatro campañas presidenciales se planteó la necesidad de una nueva legislación migratoria, cuestión que sólo se concretó hace algunos meses. Fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet que el tema adquirió una relevancia pública significativa, pero no se logró concretar una reforma migratoria por la resistencia de sectores del PS, el PPD y la DC, miembros de la Nueva Mayoría.

Lo anterior implicó una sensación de desorden y nula reacción frente a la intensificación de la migración. Es que de acuerdo a los datos disponibles, entre el 2010 y el 2015 la tasa migratoria que más se elevó en el continente fue la chilena. También, entre el 1992 y el 2017 se pasó de un 0,84% a un 4,35% de población migrante en nuestro país¹.

Con una nueva realidad que hace imposible la mantención de la legislación migratoria más antigua de toda América Latina, y con un gobierno anterior ineficaz en hacerse cargo del tema, la actual administración de Sebastián Piñera tuvo *tabula rasa* para llevar a cabo una reforma migratoria de acuerdo a sus perspectivas, tomando como puntales la seguridad nacional, el discurso del buen y mal migrante y la idea de “ordenar las casa”.

Un primer hito en el despliegue de esta política tiene que ver con el proceso de regularización migratoria extraordinario que estuvo abierto entre abril y junio del año 2018. Participaron de él alrededor de 160.000 personas², y si bien fue entendido como necesario por organizaciones migrantes y promigrantes³, también fue criticado por proponer criterios discrecionales para la obtención de visas, por la búsqueda de maquillar las cifras para sacar réditos políticos fáciles por parte del gobierno y por la mala organización general del proceso que generó esperas de días y larguísimas filas de varias cuadras de largo⁴.

1 Vargas, F. “Una ley de migraciones con enfoque de Derechos Humanos”. En Centro de Derechos Humanos UDP. (2018). *Informe anual sobre derechos humanos en Chile*. Universidad Diego Portales, p. 488.

2 *La Tercera*. (2018, 23 de julio) Migración: autoridad espera entregar mil visas diarias a extranjeros. *La Tercera*.

3 Movimiento Acción Migrante. “Declaración de la de red nacional de organizaciones migrantes y promigrantes sobre regularización”.

4 Ver, por ejemplo, Rizik, J. (2018, 31 de julio), Regularización a migrantes: Ordenar la casa, limpiar la mugre, maquillar la cifra. *Diario UChile*.

Hace algunas semanas, el subsecretario Rodrigo Ubilla puso énfasis en que 12.000 personas que participaron del proceso no cumplían con las condiciones, por lo que se debía iniciar su proceso de expulsión. Esto ha suscitado la crítica de diversas organizaciones migrantes y promigrantes, especialmente por la gran publicidad que se da a procesos que se encuentran mediados por acuerdos carcelarios vigentes, los cuales en el pasado se han desarrollado sin mayor fanfarria⁵. En buena medida, la principal acusación vertida desde la sociedad civil y parte de la oposición, tiene que ver con la búsqueda del gobierno por vincular “migración” con “crimen” y “expulsión” con “seguridad”.

Un segundo momento central del actuar del gobierno durante el año pasado fue la reactivación de la reforma migratoria presentada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Así como con el proceso de regularización extraordinario, también hubo un reconocimiento general de la necesidad de la nueva ley, que por cierto tiene elementos rescatables. Por ejemplo, la creación del Consejo de Política Migratoria puede ser un aporte autónomo y crítico, dependiendo de su composición y reglamentación.

Por su parte, las críticas al proyecto fueron intensas y están centradas, entre otros, en tres elementos: la exigencia de visas consulares, la imposibilidad de modificar la situación migratoria al interior del país y el retroceso en las garantías de un debido proceso para las expulsiones.

Lo primero dice relación con la exigencia de adquirir una visa en el consulado chileno del país de origen para poder migrar hacia nuestro país. Esto tiene como principal problema un criterio de realidad, pues existe relativa certeza -dada la evidencia tanto internacional como nacional- que la migración va a seguir sucediendo a pesar de las trabas que puedan ponerse. Un ejemplo patente de ello en Chile ha sido el caso dominicano, pues cuando se impuso la exigencia de visas consulares, lo que sucedió fue un aumento exponencial de la migración irregular y la trata de personas. ⁶Respecto a la prohibición de cambiar el estatus migratorio estando en Chile

⁵ Trincado, A. (2018, 22 de noviembre). Continúan las expulsiones masivas. *Radio JGM*.

⁶ Vargas, F., *Op. Cit.* pp. 503-504.

nuevamente se apela al criterio de realidad; así como también, a la libertad de cambiar de decisión sobre un proyecto de vida individual o familiar. En torno a las expulsiones, con la eliminación del paso administrativo para alegarlas, el tema queda en la exclusiva competencia de la Corte de Apelaciones, lo que puede pasar a llevar el debido proceso, al eliminar un recurso administrativo que incluso se encuentra presente en el DL1094 de 1975.

Un último hito fue la abstención de firmar el Pacto Migratorio en diciembre. Esta inesperada decisión se ha leído como un endurecimiento de posiciones en la temática, así como un viraje en la política exterior del país. También representó una búsqueda de aire por parte del gobierno que, en ese minuto, se encontraba fuertemente golpeado por el affaire entre Carabineros y el Ministerio del Interior a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca. Es que, entre otras cosas, esto último llevó a intensas críticas por la “blandura” de la administración piñerista por parte de José Antonio Kast. En ese sentido, esta acción puede entenderse como un intento por contener un eventual desbande dentro de la derecha.

En cualquier caso, es necesario hacer notar que las políticas del gobierno parecen tener un apoyo relevante en la población nacional. Ya en 2017, antes de comenzar el gobierno actual de Piñera, el VIII Informe Anual sobre la Situación de los DD.HH. encontró que un 68,2% de los chilenos “está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes a Chile.” El mismo informe demuestra que el 76% reconoce situaciones cotidianas de violencia contra inmigrantes, y que dichas situaciones “tienden a acentuarse entre la población joven, los segmentos socioeconómicos más bajos y la zona norte del país.” Así, se hace necesario asumir que la noción de “ordenar la casa” no responde sólo a un ideologismo, sino también a una necesidad sentida por franjas importantes de la población, lo cual implica desafíos para un proyecto migratorio emancipador.

2. Diagnóstico del apoyo ciudadano a las políticas anti-migratorias en Chile

El apoyo al proyecto migratorio promovido por el gobierno responde al menos a cuatro elementos: el malestar general asociado al neoliberalismo radical chileno; el racismo y la xenofobia históricas; los discursos globales; y la separación entre la política y la sociedad.

Es que la vida en el neoliberalismo chileno se ha ido precarizando de forma progresiva, tanto con la falta de movilidad social popular como con el riesgo de la proletarización de capas medias; cuestiones asociadas a un aumento de la desigualdad, a una mercantilización de derechos sociales y a una reducción de derechos laborales. Todo consecuencia de una correlación de fuerzas en extremo desigual, enraizada gracias al terrorismo del Estado dictatorial y consolidada en las décadas posteriores. Ante el reconocimiento de esa realidad, se levantan voces que plantean la migración como un factor explicativo de ese malestar.

En primera instancia, a nivel laboral, existe un estudio reciente del Banco Central que afirma tanto un efecto positivo de la migración en el empleo, como un estancamiento de los sueldos a propósito de la mayor masa laboral.⁷ Además, de acuerdo a un estudio de Clapes-UC del 2018, sólo un 20% de los migrantes en Chile tienen un empleo calificado,⁸ por lo que la mayor presión laboral se encuentra justamente en los segmentos de la población que más han debido asumir los efectos de la precariedad laboral, que son quienes manifiestan mayores rechazos a la migración. En ese sentido, es posible aventurar que las políticas de selección migratoria también tengan efectos en las dinámicas laborales de los próximos años: la entrada de capas medias venezolanas, por ejemplo, no tendrán las mismas consecuencias que las de grupos empobrecidos de haitianos.

En cuanto a los derechos sociales, también es posible encontrar situaciones contradictorias, pues a la vez que ha existido un aumento de los usuarios de servicios públicos de salud o educación, no necesariamente se han expandido de forma acorde las cargas de trabajo ni la capacidad infraestructural

7 El Mostrador. (2018, 5 de diciembre). Banco Central reconoce impacto del “boom migratorio” en la desaceleración salarial. *El Mostrador*.

8 La Tercera. (2018, 10 de julio). Inmigración y empleos calificados. *La Tercera*.

de recepción. En ese sentido, al mismo tiempo es posible encontrar asidero a las reivindicaciones laborales por exceso de trabajo; a las críticas a un sistema discriminatorio y segregador⁹; o a la consideración de la migración como un factor que dificulta el acceso adecuado a este tipo de prestaciones. Esto último, aun cuando los datos de la realidad no siempre se ajusten a dicha percepción.

Es que, la pérdida del empleo, del cupo en el jardín infantil o la mayor espera en el consultorio no se resuelven mediante una apelación a los datos estructurales. Por el contrario, estas experiencias de vulneración de los derechos sociales y económicos que parecen sentir una mayoría de los y las chilenas bien pueden acrecentar el malestar social derivado de nuestro neoliberalismo, canalizándolo hacia la migración que, más que la causa, es un catalizador que maximiza las consecuencias de un problema hartamente más complejo. Por cierto, el rol de los medios de comunicación en este plano existe, pero la comprensión de sujetos pasivos manipulados tiende a reproducir sesgos elitistas sobre la capacidad crítica de las personas que expresan malestar frente a la inmigración.

En cualquier caso, es indudable que los discursos públicos y hegemónicos están muchas veces atravesados por el racismo y la xenofobia. El VIII Informe Anual sobre la Situación de los DD.HH. del año 2017 constató que al mismo tiempo que existe un rechazo pronunciado a los inmigrantes, “un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser ‘más blanco que otras personas de países latinoamericanos’”, mientras que “un 71,3% se muestra de acuerdo con la afirmación de que con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas”, datos que confirman que hay una estrecha relación entre las actitudes anti-inmigrantes y la realidad histórica y actual del racismo institucional y cotidiano en Chile, ya ampliamente estudiado.

Este es un soporte ideológico importante en algunas de las reacciones que ha generado el fenómeno migratorio. También es un dispositivo fundamental para la reproducción y legitimación de desigualdades globales y estructurales de toda índole que están en la base del orden geopolítico contemporáneo, de-

9 Skoknic, F. (2008). Los efectos del “perdonazo migratorio”: salud pública espera más de 30 mil nuevos usuarios. *CIPER*.

rivado de procesos imperiales y coloniales, cuestión vinculada a los procesos de devastación medioambiental, acumulación por desposesión, apropiación de recursos y Estados “fallidos” actuales, que han conllevado un intenso aumento de flujos migratorios en diversas partes del mundo, Chile incluido.

Ello ha generado un aumento de discursos globales sobre el tema que ayudan a comprender las disposiciones actuales sobre la migración. En efecto, por un lado existen las perspectivas liberales que hacen caso omiso de las problemáticas efectivas que pueden derivarse de procesos migratorios, entendiendo su resolución como un mero ejercicio de tolerancia individual. También existe el multiculturalismo neoliberal, que mercantiliza la diferencia, y concibe al individuo como consumidor, centrando la defensa contra la discriminación en la incorporación al mercado. Por otro lado, se ha constatado una intensificación del nacionalismo de ultra derecha, que entiende la migración como un problema securitario, pero que también hace referencia a la preocupación por los derechos humanos. Es que, en la medida que se ponen trabas a la migración, se afirma, se evitan las consecuencias indeseables de la misma. La evidencia disponible afirma lo opuesto.

En el contexto chileno muchos de estos discursos se replican, pero no son meras copias. Por ejemplo, la retórica derechista no tiene tintes racistas y xenófobos tan explícitos como en Europa y Estados Unidos, por más que existan evidentes arbitrariedades en entregas de visas a migrantes de ciertos países por sobre otros y por más que se puedan inferir motivaciones racistas en el “reciclaje” de personas blancas o nacionales por personas negras y extranjeras que implica el controversial Plan de Retorno Humanitario. Asimismo, las políticas multiculturales han estado más enfocadas a los pueblos indígenas que a los grupos migrantes. Y aunque en el ámbito idiomático y educativo es posible encontrar iniciativas, estas no tienen la sistematicidad de una política pública planificada y coherente.

En efecto, parte de la labor de integración de los migrantes viene de la mano de la sociedad civil y organizada, a través de diversas agrupaciones migrantes y promigrantes. Y estas

tienen posiciones y propuestas claras sobre las necesidades institucionales y legislativas; aunque en muchas ocasiones no existe un correlato político en torno a ellas. Es que, como en otros ámbitos, las conexiones entre la política y la sociedad están cortadas, lo cual genera que la primera sea ineficaz, profundizando la desconfianza en sus capacidades transformadoras. Sumado a lo anterior, se encuentran las políticas desarrolladas desde los diversos municipios que viven con mayor intensidad el fenómeno migratorio, actores que han acusado su falta de importancia en la discusión de la nueva ley.

De este modo, una de las primeras acciones que debe realizarse desde las fuerzas de cambio es convertirse en un instrumento para la profundización de las iniciativas entregadas por organizaciones de la sociedad civil.

3. Hacia otro proyecto de movilidad y política migratoria en Chile

Ante la arremetida de la derecha en temas migratorios, la izquierda no ha logrado articular un proyecto político que pueda, al mismo tiempo, generar consenso dentro de las fuerzas políticas de cambio, encontrar apoyo en la sociedad, asumir principios de acuerdo a los derechos humanos y ser eficaz en su abordaje del fenómeno. Ha predominado, más bien, una tendencia algo pedante a corregir el sentido común antiinmigrante aludiendo a conceptos abstractos o a datos empíricos que poca relevancia tienen para las experiencias, ansiedades y fantasías de la ciudadanía en torno a la migración.

Es posible establecer una oposición entre la búsqueda por gestionar y organizar la migración, por un lado, y la perspectiva de regulación y control, por otro. La primera implica entender, como lo ha subrayado en varias ocasiones el ex Director de Extranjería Rodrigo Sandoval, la tridimensionalidad de los flujos y sus formas de gestión: controles claros, mínimos y expeditos de entrada y salida (Extranjería); relaciones internacionales que permitan el intercambio efectivo de información, así como

colaboración y reciprocidad (Cooperación entre Estados, tanto en origen, tránsito y destino); y políticas de inclusión e integración asociadas a derechos sociales y laborales (integración en el país de destino).

Para avanzar mínimamente en ese sentido, hay que establecer varias dimensiones. A corto plazo, apremia la búsqueda por modificar los elementos más problemáticos de la nueva ley migratoria que fueron comentados previamente. Ello implica gestiones a nivel parlamentario y será un elemento decisor en la capacidad de cohesión que pueda tener una oposición al gobierno de Sebastián Piñera. También será fundamental el seguimiento del proceso de reglamentación de la nueva ley, pues allí se juega que los elementos positivos de esta nueva legislación se consoliden efectivamente.

Desde una óptica de más largo aliento, un elemento que fomentaría la entrada y salida del país desde la regularidad sería la expansión de la actual visa Mercosur a población de países que no pueden acceder a ella actualmente, pero que sí son significativos en las corrientes migratorias actuales, como Venezuela, Colombia o Haití. Esta visa permite la entrada regular inmediata, así como la posibilidad de solicitar la permanencia definitiva luego de un año¹⁰.

Para ello, lo lógico sería avanzar en fortalecer acuerdos multilaterales en el ámbito de la migración que promuevan el tránsito regular y seguro de las personas, a la par que se fortalecen acuerdos ligados al comercio, infraestructura, comunicaciones y logística. Por su parte, los consulados deberían aumentar sus dotaciones y establecer mecanismos de información claros respecto de la situación socioeconómica del país y la regulación migratoria actual, a fin de que las personas puedan tomar decisiones informadas al momento de definir su proyecto migratorio, disminuyendo así la cantidad de personas en situación irregular ya llegados a Chile. Finalmente, el Estado de Chile debería establecer mecanismos que permitan establecer una mejor relación con el 1.037.346 de nacionales chilenos en el extranjero, un 50.4% de los cuales vive en Sudamérica¹¹.

Más allá de gestionar y organizar la migración, a nivel estructural, el objetivo debiera ser superar una visión parcelada de la

10 El Movimiento Acción Migrante (MAM) habla de Visa de Uso Múltiple.

11 Dicoex, INE. (2017). *Segundo registro de chilenos en el exterior*.

migración y en vez entenderla como un aspecto importante de problemas más fundamentales que sólo se resolverá mediante políticas transversales de carácter global y radical. Así, un proyecto alternativo sobre la migración incluiría tanto a la población chilena como a los colectivos migrantes y contribuiría a producir instancias de reconocimiento que reduzcan en el mediano plazo las distinciones y tensiones con motivos de la nacionalidad, etnia o color de piel.

En este sentido, identificamos al menos dos dimensiones: la construcción de derechos sociales y laborales que unan los intereses de los trabajadores nacionales y extranjeros en contra de la clase propietaria dominante; y la descentralización y el fortalecimiento de gobiernos locales, donde organizaciones de la sociedad civil tengan la libertad de implementar políticas que, de acuerdo a las realidades de territorios específicos, estimulen la convivencia. Reconocer las diferencias de clase, género, etnia y “raza” que existen dentro de la categoría “inmigrante” podría llevar a desmitificar a la “migración” como un tema separado de otros temas y en vez construir un frente de luchas en donde “inmigrantes” se vinculen con nacionales no en su condición de inmigrantes sino que de trabajadoras, mujeres, indígenas, afro, etc. Así, al mismo tiempo que se lucharía en contra de la mercantilización de la vida y a favor de la descentralización del poder y la autonomía de la sociedad, se estaría luchando por los derechos de los inmigrantes.

En todo caso, las dinámicas comentadas ya se están desarrollando, tejiéndose redes de diversas organizaciones y reivindicaciones de acuerdo a las particularidades del caso. Así, por ejemplo, la situación de Antofagasta resulta especialmente interesante, pues allí se están desarrollando procesos de politización que desbordan la comprensión sectorial del problema migratorio, entrelazándolo con cuestiones transversales como el feminismo y el derecho a la ciudad. Durante la última década, Antofagasta se ha convertido en un destino importante para inmigrantes colombianos, bolivianos, peruanos y ecuatorianos, muchos de quienes se identifican como indígenas o afrodescendientes. De acuerdo al Censo 2017, el 11% de la comuna de Antofagasta la componen personas extranjeras. De

sus aproximadamente 40,000 personas extranjeras, alrededor de 15,000 viven en 64 campamentos ubicados en los límites urbanos de la ciudad, cuya población es entre el 60 y 80% inmigrante, la mayoría mujeres¹². Estos “campamentos” permiten a las pobladoras esquivar los costos altísimos de arriendo, así como formar espacios relativamente inclusivos en una ciudad marcada por un notable racismo¹³ manifestado, por ejemplo, en la marcha anti-migrante del 2013 y en actuaciones de la alcaldesa Karen Rojo¹⁴.

A diferencia de las tomas antiguas de la ciudad, que fueron apoyadas y regularizadas históricamente, las llevadas a cabo por estos “nuevos migrantes” han sido convertidas en un gran problema. Por un lado, las autoridades regionales tanto del gobierno anterior como del gobierno actual han insistido que “todos” los campamentos actuales de la ciudad están en zonas de riesgo¹⁵, a pesar de que si bien algunas zonas de algunos campamentos tienen evidentes condiciones de riesgo, no existen estudios fundados que lo demuestren para todos los casos. A pesar de ello, el gobierno anterior creó el Plan de Superación de Campamentos (2015-18), que dio pie a una política pública en materia de campamentos única para la región, usando fondos y recursos humanos destinados para situaciones de emergencia en el Ministerio del Interior. El Plan buscó, por medio de capacitaciones a dirigentes y participación en sus organizaciones comunitarias, “contener” el crecimiento de los campamentos, permitir y justificar la presencia excepcional del Estado en estos espacios y normalizar su “erradicación” y el re-asentamiento de sus habitantes en “barrios transitorios” como la única “solución”, combinando así elementos humanitarios con elementos de seguridad nacional ante una opinión pública sospechosa del Plan.

Por otro lado, debido a los réditos económicos que generó el superciclo del cobre, estos “campamentos” tienen una naturaleza distinta a los fenómenos que históricamente se han denominado así en Chile. De hecho, los ingresos de muchos de sus habitantes los coloca por sobre la línea de pobreza nacional; las construcciones son sólidas y los espacios públicos relativamente bien planificados; y la mayoría de las personas se en-

12 Para datos recientes sobre campamentos en Antofagasta, ver El Nortero. (2019, 5 de enero). Gobernación enfrenta 5 grandes desafíos en campamentos de Antofagasta con “Mesa de Criticidad”. *El Nortero*. La cifra de la proporción inmigrante en los campamentos data de una encuesta del Gobierno Regional de Antofagasta del año 2015 y se complementa con los datos que los propios pobladores manejan sobre sus campamentos.

13 Stang, F. y Stefoni, C. (2016). La microfísica de las fronteras: Criminalización, racialización y expulsabilidad de los migrantes colombianos en Antofagasta, Chile. *Astrolabio*, (17), pp. 42–80.

14 Entre las acciones más infames, está la instalación de un cartel en el frontis de la Municipalidad de Antofagasta en agosto del 2018 en el que se leía: “NO es responsabilidad municipal: 1) Migración; 2) Campamentos; 3) Hoyos en las calles; 4) Hospital regional.”

15 Soy Antofagasta. (2018, 05 de agosto). Antofagasta: Todos los campamentos están bajo zona de riesgo. *Soy Antofagasta*.

cuentran conectadas de manera irregular pero eficiente (aunque no siempre segura) a los servicios de agua, electricidad e incluso alcantarillado¹⁶. Inclusive, una encuesta de Techo-Chile el año 2017 encontró que “el 74% de los vecinos [de campamentos] cree que su vida mejoró después de llegar a vivir en un campamento”¹⁷. Las relativamente buenas condiciones en que viven las pobladoras, sin embargo, no son vistas como evidencia de su creatividad y organización sino como ejemplo de la “frescura” de los migrantes, que se aprovecharían del país pues no “necesitan”, y por ende no merecen, el apoyo del Estado¹⁸. Esto refuerza ideas que enmarcan al inmigrante como un usurpador de recursos que debieran ser de uso exclusivo para chilenos. Pero también va en la línea de la lógica subsidiaria del Estado posdictatorial, que se manifiesta en que el Servicio de Vivienda y Urbanización se ha negado a habilitar los comités de los campamentos bajo la excusa que los nuevos pobladores se deben “poner al final de la fila” de los allegados chilenos que esperan su vivienda y que sólo serán habilitados después de que el actual catastro de campamentos “verifique” quiénes en los campamentos son “hábiles” y quiénes no.

Entendiendo sus comunidades no como espacios de transición destinados al desarraigo y la destrucción sino como barrios autogestionados emergentes, pobladoras mujeres de varios campamentos han resistido el “traslado voluntario” de sus comunidades a barrios transitorios¹⁹ y comenzado a gestionar y financiar estudios topográficos y de suelos -cuya ejecución es usualmente la responsabilidad del Estado- para así levantar propuestas de “radicación” de sus campamentos. El caso más emblemático ha sido el del Macrocampamento Los Arenales, donde las pobladoras superaron la forma organizativa del comité de vivienda, formaron una agrupación paralela a estos comités y, con la ayuda de la ONG independiente Attas-Fractal, obtuvieron financiamiento del Slum Dwellers’ International para llevar a cabo un proceso de formación intelectual, mapeos participativos y estudio de suelos. La idea contra-hegemónica de radicar sus comunidades valoriza la producción social del hábitat; evita el traslado de las comunidades de los campamentos a viviendas sociales, con las consecuencias que ello impli-

16 Fundación Superación de la Pobreza. (2017). *La vida en campamentos: Caracterización de la realidad sociocultural de quienes habitan estos asentamientos en la comuna de Antofagasta*. Área de Propuesta País.

17 El Mercurio de Antofagasta. (2019, 4 de febrero). “El 74% de los vecinos cree que su vida mejoró después de llegar a vivir a un campamento.” *El Mercurio de Antofagasta*.

18 La Tercera. (2018, 26 de marzo). Felipe Berrios: “Soy el primero en defender a los inmigrantes, pero no a los frescos.” *La Tercera*.

19 Soy Antofagasta. (2018, 3 de febrero). Familias se niegan a salir de campamento y trasladarse al Barrio Transitorio de La Chimba en Antofagasta. *Soy Antofagasta*.

ca; libera a las pobladoras de las ataduras y disciplinamiento de los subsidios habitacionales y del sistema patriarcal que encuentra su eje de poder en el hogar; y les permite mayor control sobre el proceso de planificación y construcción de sus comunidades. Asimismo, los campamentos han generado procesos de identificación que tienen como referente la unidad continental, desarrollando actividades que apuntan al anhelo de construir una “ciudad latinoamericana”.

En definitiva, en Antofagasta logramos reconocer una articulación entre la lucha por los derechos humanos de los inmigrantes a vivir dignamente con otras luchas relevantes a nivel nacional, como la feminista y las urbanas por una ciudad justa. Y es que, en el proceso de su lucha por defender sus territorios, muchas de estas pobladoras inmigrantes han tejido relaciones con movimientos de pobladoras por la autogestión habitacional como también movimientos feministas, que reconocen que las luchas populares en comunidades marginadas de las ciudades han tenido históricamente a mujeres como protagonistas.

Ante la hegemonía de la derecha en las políticas de migración en el Chile actual y la falta de un proyecto político de izquierda, es necesario que las fuerzas políticas de cambio se rearticulen con movimientos y organizaciones ya presentes en terreno. Las posturas moralizantes y la apelación a datos empíricos abstractos tiene que ver justamente con la falta de una infraestructura que una las luchas de personas inmigrantes por sus derechos sociales y económicos con las propuestas institucionales sobre la migración. Construir dicha infraestructura a nivel organizacional y comunicacional nos permitirá concebir que la migración como derecho humano tiene como condición de posibilidad la construcción de derechos políticos, sociales y laborales efectivos y democratizadores; y para construir la fuerza que habilite esto último, no se puede prescindir de la población migrante.

“CHALECOS AMARILLOS” EN FRANCIA: POTENCIAS Y LÍMITES DEL DESCONTENTO

Alejandro Fielbaum

Licenciado en Filosofía. Estudiante de Doctorado en la Universidad de París 8

Vicente Montenegro

Sociólogo. Estudiante de Doctorado en la Universidad de Toulouse II – Jean Jaurès

***E**l artículo presenta los antecedentes y el contexto político que permiten comprender el surgimiento del movimiento de los “chalecos amarillos” (gilets jaunes) en Francia, el que, desde octubre de 2018, enfrenta al gobierno de Emmanuel Macron con una de las movilizaciones de protesta más importantes de los últimos años. Se analizan algunos aspectos de su heterogénea composición social e ideológica, así como sus principales características de acción colectiva, que han hecho que el movimiento se desarrolle con independencia de partidos y sindicatos de la política tradicional. Tomando en consideración el análisis de algunos intelectuales que han intentado evaluar el alcance del movimiento más allá de su irrupción mediática, se propone una lectura que permita extraer lecciones para una política de izquierda de uno y otro lado del Atlántico.*

Hace casi veinticinco años, el sociólogo Pierre Bourdieu intervenía en el debate público para apoyar masivas movilizaciones en Francia que, a su juicio, luchaban por la defensa de lo que caracterizó como “una civilización asociada a la existencia del servicio público y la igualdad republicana de los derechos a la educación, la salud, la cultura y, en particular, el trabajo”¹. En los comienzos de la destrucción del Estado del Bienestar forjado tras las guerras libradas en el suelo europeo, Bourdieu cuestionaba el ascenso de las tecnocracias que equiparaban la razón con la racionalidad económica, así como a los intelectuales que oponían la comprensión racional del mundo a los intereses populares de las mayorías. En específico, Pierre Bourdieu apuntaba al filósofo Paul Ricœur, quizás no tan irónicamente el mentor de quien ha intentado décadas después implementar de modo más radical la agenda neoliberal en Francia: el Presidente Emmanuel Macron.

Su curiosa trayectoria es, de hecho, sintomática del proyecto que encarna. Tras estudiar filosofía en una universidad pública, pasa a graduarse en finanzas en la elitista Escuela Nacional de Administración. Dedicado al mundo de los negocios, redacta informes financieros para el gobierno derechista de Nicolas Sarkozy, después de lo cual se transforma en ministro de Economía del gobierno socialista de François Hollande. Luego de una fugaz militancia en el PS (3 años), crea el movimiento ¡En Marcha! (cuyas iniciales coinciden con las de su propio nombre), aprovechando la relativa fama que adquiere como rostro de la “renovación política”.

Mediante un liderazgo carismático acompañado de un discurso tecnocrático que busca superar la distinción entre izquierda y derecha y terminar con la corrupción estatal, Macron vence en la primera vuelta presidencial del 2017 obteniendo poco más del 24% de la votación, en contraste con el escuálido 6,7% que obtiene el candidato de continuidad del gobierno de Hollande, Benoît Hamon. El dato es expresivo de la crisis de los partidos tradicionales que habían gobernado desde 1956 la V República francesa. Más aún si se considera que los oponentes más fuertes a Macron provienen de otros partidos no tradicionales: la ya conocida nacionalista de derecha Marine

1 Bourdieu, P. (2000). “Contra la destrucción de una civilización”. *En Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*. Barcelona: Anagrama, p. 38.

Le Pen, quien obtuvo el 21% y el ex socialista Jean-Luc Mélenchon, quien casi alcanza el 20% de los votos con la alianza Francia Insumisa que funda y lidera para las elecciones, con un discurso nacional-popular no lejano a la retórica de Podemos y otros populismos de izquierda. Ante la segunda vuelta con Le Pen, Macron obtiene tanto el voto antifascista por el mal menor como la venia de las élites financieras y políticas internacionales que percibe en Le Pen una amenaza para la Unión Europea, al punto que Obama y Merkel declaran su apoyo a Macron, quien finalmente casi dobla a Le Pen en segunda vuelta, asumiendo en mayo del 2017 como el gobernante de la República más joven desde Napoleón.

Antes de que se cumpla la primera mitad de su gobierno, el liderazgo de Macron se halla en crisis. Al desalojo de la ZAD en Notre-Dame-des-Landes², se sumó el llamado "affaire Benalla"³, seguido poco después por la renuncia del ministro de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, en agosto de 2018, quien declaraba al momento de anunciar su renuncia por la radio que "no quería seguir mintiendo", haciendo directa referencia al nulo avance y las pocas perspectivas de cambio en materia energética y medioambiental. Su renuncia era la quinta baja en el gabinete de Macron. Identificado popularmente como "el Presidente de los ricos", las transformaciones que ha impulsado su gobierno son cuestionadas por la mayoría de la población francesa. Entre ellas, la supresión del impuesto a la riqueza⁴, las propuestas de reforma al estatuto laboral de los trabajadores ferroviarios (los "cheminots")⁵, y la inédita instauración de la selección en las universidades francesas. Con tales medidas, el gobierno de Macron despliega transformaciones neoliberales que ni siquiera Sarkozy había osado, al punto que se ha instaurado un cobro especial para la inscripción en las universidades públicas a estudiantes extranjeros no provenientes de la Unión Europea, que pasará de 170 a 3.770 euros anuales, con el objetivo declarado de hacer más atractiva la universidad francesa en el extranjero (*sic*). Ello no sólo contrasta con el fuerte imaginario republicano arraigado en el país, que identifica la ciudadanía con el acceso gratuito a los derechos, sino que, además, abre la pregunta de si quie-

2 "ZAD" es la sigla para "Zone à défendre" (*zona a defender*). Conformada por cerca de 300 personas, principalmente ecologistas, la comunidad llevaba instalada allí desde 2009 para impedir la construcción de un gran aeropuerto y, con el tiempo, desarrollaron una organización colectivista y autosustentable. Fue violentamente desalojada en abril de 2018 por orden de Macron.

3 El "affaire Benalla" refiere al caso de Alexandre Benalla, un funcionario de seguridad cercano a Macron, involucrado en una situación de violenta represión durante manifestaciones del primero de mayo de 2018 en París. Sin ser miembro de la policía, varios videos dados a conocer en julio de 2018 registraron a Benalla reprimiendo a manifestantes en pleno centro de la capital.

4 El "Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna" (ISF), impuesto a la gran riqueza en Francia creado en 1989, fue reemplazado por el "Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria" (IFI), en enero de 2018, medida emblemática del programa de gobierno de Macron.

5 Se trata de una reforma al estatuto laboral de los trabajadores de la SNCF, la empresa estatal de ferrocarriles franceses, que pondrá fin, a partir del año 2020, al actual estatuto laboral, que garantiza mínimos de estabilidad, remuneraciones y condiciones de jubilación, así como servicios de seguridad social especiales.

nes porten pasaporte europeo, o acaso francés, deberán pagar también montos similares en un mediano plazo.

Ante ello, el movimiento estudiantil francés inició tomas de campus y movilizaciones en distintas ciudades, atravesadas por las fantasías que suscitaba el retorno del “mayo del ‘68” a 50 años de su conmemoración. En simultáneo, las movilizaciones de los trabajadores ferroviarios también fueron relevantes durante el primer semestre. Sin embargo, ni el movimiento estudiantil ni el sindical lograron establecer un conjunto de propuestas unitario que pudiera condensar masivamente el malestar más allá de sus respectivos movimientos, a la vez que el liderazgo personalista de Mélenchon apostó por capitalizar para su movimiento ese malestar. De este modo, ninguna figura o movimiento pareció capacitado para mediar en el sistema político un malestar ante el neoliberalismo que excede a las distintas demandas en particular.

Es en medio de ese bloqueo político que emerge el impredecible movimiento de los “chalecos amarillos” (*“gilets jaunes”*). Gatillado inicialmente por el anuncio del alza al impuesto del consumo individual de combustibles, que afecta particularmente las economías familiares de la población que habita zonas rurales de Francia (la población que para su diario vivir depende de un uso intensivo del automóvil), el movimiento comienza con el bloqueo de rotondas y peajes, y con el uso masivo del chaleco reflectante de color amarillo, implemento que por ley —al igual que en Chile a partir del 2016— deben utilizar todos los automovilistas en caso de desperfecto o accidente. De este modo, una medida que buscaba presentarse como una política ecológica progresista⁶, pero que no alteraba el régimen impositivo de las grandes empresas, termina muy pronto por revelar el carácter neoliberal de un gobierno incapaz de pensar en otro reparto fiscal y energético. Asimismo, la protesta vinculada a formas individuales de consumo termina gatillando la expresión de un descontento político compartido.

En un país política y culturalmente centralista, el movimiento germina desde las regiones, con una presencia importante de mujeres entre sus filas, aunque sin una agenda explícitamente feminista, y con poca presencia de inmigrantes o población

6 Inicialmente anunciada como parte de una agenda para la transición ecológica, la medida en realidad sólo tenía por finalidad una mayor recaudación fiscal, pero que afectaba única y exclusivamente a los usuarios particulares. Esta medida no se puede entender sin la renuncia, un par de meses antes, del ministro Nicolas Hulot.

afro-descendiente. Sin una organización, ideología o liderazgos del todo definidos, sus movilizaciones convocadas cada sábado comienzan a crecer y rápidamente se desplazan de las regiones al centro de París y las grandes ciudades, alcanzando su clímax en diciembre del 2018, con gran masividad de convocatoria y fuertes enfrentamientos con la policía en las calles de los barrios más ricos de París. Tras ello, el Gobierno anuncia el congelamiento provisorio del alza de impuestos y la realización de un “Gran Debate Nacional”, que no siendo mucho más que un cuestionario abierto a través de internet, junto a la posibilidad de organizar cabildos locales, se revela como una medida de contención de limitado alcance y legitimidad (y que en algún punto recuerda, por lo demás, la estrategia diseñada por el último gobierno de Bachelet en torno al llamado “proceso constituyente”). Rápidamente en las movilizaciones, de hecho, apareció la consigna *no queremos debatir, queremos decidir*. La lógica tecnocrática de Macron, sin embargo, está bastante lejos de ceder en ese punto y recular en su agenda privatizadora. Tras ya cuatro meses de movilizaciones, la apuesta del gobierno parece ser la de esperar el desgaste del movimiento, acompañado, por cierto, de una inusitada represión que cuenta ya con más de 100 heridos graves, entre los que se cuentan 14 personas que han perdido un ojo producto del impacto de “balas de defensa”.

La retórica que acompaña las propuestas enrostra a Macron la falsedad de sus promesas en los términos que él mismo había legitimado: a saber, defender los intereses de “individuos corrientes” sin ser ni de izquierda ni de derecha, lo que Macron no puede realizar dado que su compromiso con los intereses millonarios imposibilita la transversalidad prometida. Puede que sea precisamente por su indeterminación, y no pese a ella, que el movimiento haya adquirido la masividad de la que carecieron las protestas previas contra el gobierno de Macron.

En efecto, las formas de asociación del movimiento se vinculan a las redes sociales antes que a los sindicatos, federaciones o partidos políticos, a la vez que en su discurso se combinan elementos de la derecha y la izquierda. La heterogeneidad de las protestas lideradas por un movimiento sin formas de per-

tenencia claras ha visibilizado en las calles desde grupos de ultraderecha hasta anarquistas, lo que se replica en los distintos pliegues de demandas que han sido producidos y reproducidos informalmente por quienes participan o simpatizan con el movimiento. Entre ellas, por ejemplo, pueden hallarse el alza del salario mínimo y de las jubilaciones, pero también, la ambigua solicitud de devolución a su país de origen de las personas a las que se les ha denegado el derecho de asilo, solicitud que aparece poco después de haber demandado la colaboración de la ONU para garantizar los derechos humanos de los refugiados⁷.

En ese sentido, para la izquierda francesa ha resultado difícil tomar posición ante un movimiento que simultáneamente se acerca y aleja de sus demandas históricas. Las figuras públicas de la izquierda en el campo intelectual francés guardaron un silencio sintomático ante las primeras manifestaciones, que hartamente contrasta con el apoyo que rápidamente suelen proclamar frente a otras movilizaciones. Ha sido sólo después de su crecimiento, y de su persistencia en el tiempo, que han surgido algunos de los análisis que pueden ser útiles para comprender los motivos y proyecciones del movimiento.

En un análisis bastante esclarecedor, Étienne Balibar vincula el descontento expresado por el movimiento con nuevas formas de trabajo en zonas rurales y urbanas. Contra la imagen promovida por el Gobierno de Francia como un país de emprendedores vinculados a la tecnología y de empresas emergentes (una "*start-up nation*", en la jerga económica), el uso de las tecnologías ha servido para precarizar trabajos sin un tiempo o espacio que permita distinguir entre la vida y el trabajo, ni mucho menos garantizar los ingresos esperados. Antes bien, con la progresiva *uberización* del trabajo emerge un nuevo tipo de precarización que, de distintos modos en función de los niveles de profesionalización e inserción en el mercado, afecta el trabajo de manera transversal⁸, aunque impactando de manera más aguda a la población migrante.

Es evidente que ese tipo de transformaciones no son nuevas en la economía europea. Sin embargo, el Estado francés había resistido al desmantelamiento neoliberal con mayor fuerza

7 Ver el petitorio (no oficial) publicado en: Brioulet, C. (2018, 30 de noviembre). Les Gilets jaunes envoient une nouvelle version de leurs revendications, *La dépêche*.

8 Étienne Balibar, (2018, 20 de diciembre). "Gilets jaunes": the meaning of the confrontation, *openDemocracy*.

que otros de sus pares europeos. Lo que estalla hoy, en ese sentido, es cierto descontento ante la creciente desprotección que ya comenzaba a denunciar Bourdieu poco después de la caída del Muro de Berlín. Así pues, Jacques Rancière recuerda en una entrevista reciente a propósito del movimiento, que hasta hace poco parecía normal suponer el carácter público del transporte, el correo, el teléfono, la salud y otros bienes que podían suponer cierto tipo de igualdad, ante lo cual hoy es la desigualdad lo que parece mucho más evidente, incluso sin que tales servicios se hayan privatizado del todo⁹.

El descontento generalizado es compartido también por quienes de hecho poseen una inclusión más clara en el mercado del trabajo, pues este ha dejado de garantizar el acceso a los servicios básicos. Según recuerda Judith Revel, un quinto de la gente que duerme en la calle posee un contrato laboral que puede permitir la posesión de un automóvil, antes que el arriendo de un espacio para vivir¹⁰. Esto otorga aun más heterogeneidad e incluso una cierta ambigüedad a la composición social del movimiento, lo que si bien impide reconocer inmediatamente una identidad de clase, permite en cambio redefinir el concepto de clase social de otro modo.

La articulación política de esas franjas, más allá del saludable rechazo al gobierno, sigue siendo un desafío. Los azares de la métrica permiten que sea fácil exigir la renuncia de Macron en las protestas ("*Macron, démission!*" se ha vuelto lugar común durante las concentraciones), pero sería imposible delimitar qué se propone tras ese slogan, ni menos aun precisar qué vendría después. La violencia callejera puede detener el alza de impuestos, pero difícilmente proponer modelos alternativos de educación, políticas migratorias o acceso a la salud. Lamentablemente, la izquierda francesa ha estado lejos de promover esa articulación. Mientras la Central General de Trabajadores (CGT) vinculada al Partido Comunista ha simpatizado tardíamente con las movilizaciones tras su rechazo inicial, desde las primeras movilizaciones Mélenchon apoya al movimiento con un intento de capitalización individual del descontento para las futuras elecciones, con una estrategia no del todo distinta a la de Le Pen. Como bien denuncia Antonio Negri, ha primado una

⁹ Jacques Rancière, (2019, 20 de enero). Jacques Rancière sur les Gilets Jaunes, *Mediapart*.

¹⁰ Judith Revel, (2019, 17 de enero). "La protesta de los chalecos amarillos tiene que ver con la vida, la gente dice: 'No conseguimos vivir así'", *El Salto*.

lógica que intenta instrumentalizar el movimiento en lugar de potenciar su autonomía hacia una estrategia anti-neoliberal¹¹.

Para ello, evidentemente, no basta con que la izquierda manifieste o no su apoyo explícito a movilizaciones que han demostrado que no necesitan de ese apoyo para subsistir, y que de hecho pueden traspasar su descontento hacia otros sectores de la población, como sucede en otras zonas de Europa. Comentando la situación desde Brasil, cuyas movilizaciones del 2015 permitieron visibilizar un descontento no totalmente distinto al francés, y que terminó capitalizando Bolsonaro, Vladimir Safatle explicita que la actual crisis en las formas de gobierno puede dar pie tanto a lo peor como a lo mejor¹². Para que prime lo segundo, es necesario superar tanto el fetichismo de la violencia callejera como el de la contienda electoral, para generar cierta politización que pueda transformar el descontento en una agenda que articule de manera más decidida las demandas de los movimientos de mujeres, migrantes, trabajadores/as y estudiantes, varias de las cuales hoy se hallan ausentes en las movilizaciones. Esto es, una política que pueda organizar el descontento sin suplantarlo a quienes se movilizan. Desafío, por supuesto, que no se limita a la izquierda francesa en un presente global que exige la construcción de una alternativa al neoliberalismo que incluya y sobrepase políticamente la agitación.

10 Antonio Negri, (2018, 8 de diciembre). French Insurrection, *Verso*.

11 Vladimir Safatle, (2018, 14 de diciembre). Paris queima, *Folha de S.Paulo*.

**CATALINA PÉREZ**

FUENTE: elmostrador.cl

“La disputa por la hegemonía requiere de un esfuerzo que supera con creces el ámbito de lo institucional”

Protagonista de una de las internas más disputadas en la corta historia de Revolución Democrática (RD), a pocos días de su ascensión como presidenta del partido y tras retomar a pleno sus actividades como diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez recibe a *Cuadernos de Coyuntura* para hablar del proyecto que encabeza y de los desafíos que el año 2019 trae para el Frente Amplio, cumplido un año de su instalación parlamentaria. A continuación, compartimos los detalles de la conversación sostenida por Fundación Nodo XXI con una dirigente política que seguramente tendrá un rol clave en la reestructuración del mapa social y político en Chile.

Dentro de los ejes más importantes en su llegada a la presidencia de RD están una apuesta por la descentralización y otra por afirmar el papel de construcción social que debe encarar el partido. ¿Puede ahondar en ellos?

Cuando hablamos de descentralizar, estamos hablando de una apuesta política por un tipo de partido determinado. Eso es una discusión que no se ha dado y es una decisión que RD tiene que tomar, respecto a qué tipo de partido quiere ser. Es una decisión con la que no nos hemos comprometido todavía, por una parte, por ausencia de debate interno, pero también por querer dejar la puerta abierta a la posibilidad de que el partido funcionase como plataforma de instalación de un proyecto político lo suficientemente sólido y a la vez complejo para los desafíos del Chile contemporáneo. La propia decisión de pasar de ser un movimiento a un partido político fue una decisión difícil y dice mucho sobre querer tener las puertas abiertas en relación a cuál es el rol que nos corresponde jugar en el escenario político chileno.

Siendo además personas que hicimos formación política en el mundo social, en la campaña establecimos que esta es una decisión que tenemos que tomar, porque el escenario político chileno y su reconfiguración no permite que mantengamos esa indefinición. En eso nos la jugamos por dos apuestas: una, por pasar a ser a un partido derechamente ideológico y no tan instrumental, y otra tiene que ver con cómo reconfiguramos la idea de ser un partido con fuerte arraigo territorial, es decir, un partido de masas. Eso tiene que ver no sólo con la clásica discusión de la izquierda sobre partido de masas versus partido de cuadros, sino también con cómo creemos que hoy se juegan los procesos políticos en Chile. Desde ahí, creemos que la idea de construir un partido ideológico, si se quiere también de esta izquierda del siglo XXI, tiene relación con tomar una decisión y definiciones más claras y profundas de cuestiones como cuál queremos que sea nuestro modelo de producción y consumo para ofrecerle al país, qué idea de democracia y compromiso con los Derechos Humanos defenderemos, cómo queremos abordar los discursos populistas de izquierda, o si buscaremos proyectarnos como mayoría en el escenario político nacional.

Por otro lado, la apuesta por la territorialización y el carácter de masas del partido tiene que ver con qué rol le atribuimos a la movilización social —al millón de personas que votaron en el plebiscito NO+AFP, al millón de mujeres que salieron a marchar el pasado 8 de marzo— en la construcción de un nuevo proyecto político transformador para Chile. En tal medida, la discusión se relaciona con cómo RD logra conducir y entender tales procesos sociales, sin instrumentalizarlos, comprendiéndolos como expresiones del presente social y político del país. Lograr eso pasa por descentralizar la oferta política de RD: acercar y concretar el proyecto político en los territorios, y entender que la disputa por la hegemonía cultural también es una de las dimensiones relevantes de nuestro proyecto. Subyace, en definitiva, la pregunta respecto a qué queremos ser: ¿gestores de políticas públicas o un actor social y político con capacidad de articular otros sectores, con capacidad para ir reconfigurando el tejido social?

Mencionas la cuestión de haber privilegiado una configuración de tipo instrumental antes que ideológica en RD, y en tu campaña sostuviste con fuerza la idea de la necesidad de ir dotando de contenidos a una izquierda del siglo XXI. ¿Qué elementos caracterizarían a un proyecto así y a su horizonte estratégico?

Creo que a la izquierda tradicional le ha costado responder a fenómenos globales que invitan a cuestionar las clásicas soluciones que hemos brindado. El “más o menos Estado” hoy no alcanza para dilucidar soluciones a fenómenos como la migración, la globalización, el cambio climático o el narcotráfico internacional. La clásica configuración de la izquierda ha sido insuficiente para plantearse ante una hegemonía neoliberal abrumadora en el campo sociocultural, y que nos termina poniendo siempre en un lugar de minorías, cuando lo que hoy necesitamos es precisamente lo contrario: tener la aspiración de configurar mayorías sociales que permitan disputar la hegemonía cultural capitalista.

Esa es una definición ideológica, pero cruzada por una dimensión estratégica donde quizás las izquierdas no nos logremos poner de acuerdo, pero en donde una puede jugar un papel.

Las diferentes configuraciones identitarias de la izquierda deben contribuir hoy a que seamos capaces de hacer frente al capitalismo neoliberal desde nuestra diversidad: no creo que hoy haya, o que deba haber, una fórmula única para ser de izquierda en Chile. Porque si bien no creo que lleguemos a una respuesta política única, lo que importa es cómo frente a la actual configuración cultural, política y económica, nos posicionamos con respuestas frescas. Y ahí una izquierda de mayorías, que adopte al feminismo como un principio transversal, que se planteé ecosocialista al hacerse cargo de la ecología y el medioambiente, que entienda no solamente al sacrificio o algún tipo de coherencia prístina como identidad política, sino también al deseo como impulsor de un nuevo modelo de sociedad: allí no se pueden obviar las lógicas neoliberales culturalmente hegemónicas. ¿Cómo integramos o articulamos tales asuntos? Esa es una de las grandes preguntas que hoy debemos enfrentar desde la izquierda para ofrecer una alternativa real a Chile. Allí también el sentido de lo revolucionario debe ser reconfigurado: ¿cuál es la revolución a la que la izquierda va a apostar hoy?

Has sido enfática en afirmar que el domicilio político de RD es el Frente Amplio (FA) y que una de las tareas prioritarias del partido es apostar por la maduración política de este proyecto. Luego de un primer año de instalación fundamentalmente parlamentaria, ¿cuáles son los desafíos sociales y políticos que enfrenta actualmente el FA, pensando en el año 2019?

El principal desafío es decidir si queremos ser una alianza política y social, porque es algo aún no decidido. Tenemos la puerta abierta en dos caminos: podemos continuar siendo una alianza electoral que se encarga de administrar lo institucional o podemos apostar por profundizar esa alianza electoral en torno a un proyecto político y social que haga sentido no sólo cuando seamos Gobierno y ejecutemos el “Programa de Muchos”, sino también en la coyuntura y realidad actual de cada espacio local y movimientos sociales en Chile, donde el FA tiene presencia. Entender el desafío del FA como un desafío político y social implica llegar a un acuerdo común respecto a cuál

es la estrategia que vamos a utilizar y cuáles son los actores con los que nos vamos a relacionar para hacer frente al modelo neoliberal. Hoy no tenemos tan decidido —por ejemplo— si queremos enfocarnos en lo local desde los conflictos socioambientales, para desde allí construir una posición para las próximas elecciones municipales, ¡o siquiera si esas próximas elecciones municipales marcan los tiempos y dinámicas del FA en lo local!

¿Es necesaria esa maduración política y social del FA, para ir más allá de un simple pacto electoral?

Hoy es una tontera no hacerlo. Porque tenemos que tener el convencimiento de que la disputa por la hegemonía requiere de un esfuerzo que supera con creces el ámbito de lo institucional, y además hoy en día lo institucional está muy vaciado socialmente, hay poco pueblo allí.

En un sentido estratégico, renunciar hoy a lo político y social “no institucional” es no comprender el escenario político y social chileno. Además, hay un espacio de oportunidad enorme porque no hay oferta política para ese segmento de la población que no vota en Chile. Desde esa perspectiva, ¿se va a encargar de reivindicar lo colectivo por sobre lo individual en el sistema actual? No hacerlo es regalar a la ultraderecha un espacio que hoy no está ocupado, es regalárselo a la conflictividad social creciente o a la precarización de los barrios más pobres de Chile. Es renunciar a la oportunidad de una irrupción, incluso político-institucional, de una nueva fuerza política. Pero para hacer eso hay que atreverse a romper varias barreras.

¿Qué tiene que pasar dentro del FA en 2019 para ir avanzando en esa dirección?

El punto es si lo institucional es un medio o un fin, si nos va a alcanzar para ofrecer al país un nuevo Chile. Tiendo a pensar que, dado que no vamos a tener el poder económico, comunicacional o militar detrás, no podemos farrear la posibilidad de construir poder popular como espalda social y política. La construcción de poder popular hoy, en este contexto, requiere repensar la configuración identitaria del poder popular en Chile, reconstruir una tradición de este tipo. El proceso de la Unidad Popular en eso nos enseñó muchísimo respecto a cómo

se comprendía y configuraba un escenario político donde las identidades iban confluyendo para hacer frente a un modelo. ¿Cuáles son esas nuevas identidades? No son las de antes, no sé si las nuevas identidades van a estar en torno a la vivienda, a lo religioso o en torno al conflicto socioambiental. ¿Dónde están esas identidades?, ¿dónde propiciamos que estén y cómo nos apropiamos también de ellas en lo discursivo, en el entendimiento del nuevo Chile?

Pero eso es un salto al vacío, una apuesta por lo desconocido, y hacer ese tipo de apuestas es siempre más difícil que jugar dentro del tablero de lo conocido. Y, en el FA, siento que también nos jugamos constantemente esa carta: entre el pragmatismo, la gobernabilidad, el crecimiento, la impugnación. No hay una lectura compartida, una lectura sociológica del Chile actual. Lo que sí hay es un horizonte compartido de él, pero en la medida que no hagamos un diagnóstico compartido es difícil que hagamos una estrategia compartida. Eso es lo que debería pasar para ir avanzando.

Se ha escuchado decir que la marcha del 8M es la más masiva que ha habido en varias décadas en Chile, lo que hace parecer ficticio eso de que la gente está desinteresada. Quizás puede ser que los partidos sean los que estén en otra parte...

Es importante preguntarse qué hicimos bien ahora y qué habíamos hecho mal antes para que esto haya ocurrido ahora y no en el pasado. Las mujeres sufríamos la misma violencia diez años atrás, la precarización en el empleo viene siendo la misma, las situaciones de violencia, la configuración del modelo productivo. ¿Qué ocurrió ahora que no había ocurrido antes?

Me parece que también tiene que ver un poco con lo pop, con la disputa cultural, con tener a la Mónica Rincón en noticieros hablando de feminismo, con que tuviéramos a una comediente en el Festival de Viña hablando de feminismo y de sororidad: eso quizás sería algo que hace 5 años no nos hubiésemos atrevido a hacer, porque reivindicábamos nuestra condición de minoría, de no irrupción. No me atrevo a arrogarme el diagnóstico de esto, pero un elemento a considerar es cómo lograr irrumpir de forma real en el modelo. Por ejemplo, las farmacias popula-

res, ¿por qué tienen éxito? Porque la gente tenía necesidad de consumo de medicamentos a un precio menor, y porque otorga una posibilidad inmediata para el consumo, lo democratiza. ¿Nos hubiésemos atrevido a hacer esto hace cinco años atrás?

Es necesario entender que, si la derecha se apropia de conceptos como la justicia, la igualdad es porque entienden los sentidos comunes que funcionan en la sociedad. Entonces debemos preguntarnos qué tan dispuestos estamos a jugar con esos sentidos comunes, lo que no implica renunciar a lo que pensamos, a la profundidad de nuestro pensamiento, no implica renunciar al socialismo: implica repensar maneras de comunicarlo y, así, de repensar los caminos de llegada.

Estando a la orden del día la ofensiva de las derechas a escala mundial y pudiendo haber algún germen de ello en Chile, ¿Qué papel le cabe al FA en la reconfiguración de la izquierda y el progresismo?

Estamos ante un escenario muy rico en términos de posibilidades políticas, por ejemplo, con el término del sistema binominal. Pero, evidentemente, también tiene lo agraz de tener que repensar cómo se hace política desde la calle y, a la vez, desde la institucionalidad. Y ese nuevo escenario nos lleva a comprometernos con cosas que no estábamos disponibles para defender en otro momento, y creo que ese es el escenario en el que avanza la extrema derecha en Chile: te pone contra las cuerdas en relación a “qué tanto eres parte del modelo, del sistema”.

Y allí es central el si seremos capaces de configurar no solamente un “todos contra la derecha”, sino más bien un proyecto político que le haga sentido a las grandes mayorías. Yo no quiero una izquierda que se ponga a defender el Congreso como institución republicana. Además, como la derecha se plantea desde un rol impugnador, nos roba y se apropia esa rebeldía. La derecha apela a que “se vayan los corruptos” y con eso cubre un velo de racismo, de violencia, de miedo. Frente a esto nosotros terminamos defendiendo la democracia, pero ¿qué es la democracia para la gente? La gente entiende la corrupción, pero no parece estar tan preocupada de la democracia. Ella está pensando en la seguridad, en la salud, en la economía.

¿El FA debería apurar la instalación de una agenda de temas en ese sentido?

Una cosa es cómo incidimos en el reordenamiento de la oposición y reconfiguramos alianzas políticas para ir ganando espacios, evitando que la derecha se quede con la mayor parte de los municipios de Chile. Sin embargo, creo que el problema de fondo es cómo la izquierda logra ser capaz de ofrecer soluciones a viejos y nuevos problemas. Y, en ese sentido, que no tengamos una propuesta diferenciadora en materias de seguridad o incluso migración, en escenarios donde la respuesta de la derecha es muy clara, me parece grave. Nuestra respuesta a esos temas es “democracia y derechos humanos”, pero ¿en qué se traduce eso? Los problemas cotidianos de la gente no parecen tener que ver directamente con eso. Entonces, desde la izquierda debemos trabajar por apropiarnos de esos temas y por repensar soluciones en función de nuestros principios. No lo hizo la Nueva Mayoría porque no lo necesitaba en el marco de un sistema binominal, y el FA no lo ha hecho porque todavía nos falta desarrollo político y nos falta profundizar un acuerdo político y una mirada sobre el Chile actual. Probablemente lleguemos a soluciones distintas con ese tipo de actores, no tanto respecto del horizonte, pero sí, quizás, en relación al camino que vamos a implementar para alcanzarlo.

Porque la respuesta que estamos planteando para estos nuevos problemas son distintas, y la capacidad que pensamos que tiene Chile para avanzar y correr las barreras de lo que se ha pensado como posible, también son diferentes. Tenemos una visión distinta del rol que juega la corrupción, por ejemplo; o cuáles son las condiciones que satisfacen el pacto democrático. Y entiendo que es porque venimos de historias diferentes: la emergencia del FA y de RD viene de un ciclo político en el cual el concepto de democracia se vació de contenido, donde la democracia formal que nuestros viejos consiguieron a punta de sangre y muerte, ya no nos resultó suficiente. Se volvió entonces necesario dar un paso más: queríamos hablar de deliberación, de participación política, de accountability, de gobernanza, de gobierno abierto, entre otras cosas. Y eso es algo que hoy nos hace mucho sentido no sólo en las formas, sino

también en el fondo de lo que queremos proponer, y eso es diferenciador respecto a otras visiones de oposición que existen. Es eso lo que determina que el FA exista y que busquemos configurar una izquierda que se la juegue por estar a la altura de los desafíos del siglo XXI.

Al parecer estarías de acuerdo con que un barómetro de éxito para el FA en el mediano plazo sea la posibilidad de reconstruir una alianza política y social más amplia. ¿En base a qué elementos un proyecto de izquierda del siglo XXI debería cifrar sus esfuerzos?

Me imagino al Frente Amplio como un espacio de articulación político-social. Me lo imagino como un espacio donde la gente vive lo colectivo. Y eso implica modificaciones en las dinámicas internas del FA, como también proyecciones de agenda en los espacios locales de inserción. Me imagino a la gente organizándose en los comunales del FA para movilizarse en contra de la termoeléctrica que tenemos en Tocopilla. O me imagino a la gente organizándose en el Frente Amplio para involucrarse en el proceso participativo del gobierno en torno a cambio climático para introducir ahí nuestra agenda. También me imagino al Frente Amplio como un espacio donde la gente se organice para iniciativas como tener huertos comunitarios en la ciudad.

Me imagino al Frente Amplio como un espacio político donde lo colectivo es la solución a los problemas, y donde desde esa disputa hacemos frente a la lógica neoliberal-individual de resolución de las conflictividades. Y eso es la farmacia popular, la universidad popular, la óptica popular, y por eso es tan relevante la configuración dentro del proyecto del FA de las gobernanzas locales, de cómo se reconfigura la gobernabilidad y la participación ciudadana como un proceso deliberativo constante en la comunidad. Eso tiene un correlato con cómo encontramos en los movimientos sociales a nuestros principales aliados, cómo pensamos más allá de la alianza parlamentaria que haremos para sostener el acuerdo administrativo y también con cómo hacemos del FA en sí mismo una expresión del socialismo que nos estamos imaginando, como

un espacio deliberativo descentralizado, donde, por ejemplo, hacemos plebiscitos para decidir cosas, donde hacemos asambleas abiertas, donde las y los independientes pueden participar, donde imaginamos que la organización política no está sólo en los partidos.

Entonces, ¿para qué adoptamos las mismas lógicas de la institucionalidad que intentamos romper? Ahí tendremos que ver cómo reimaginamos, yéndonos a la interna del conglomerado. ¿Cómo reinventamos la mesa nacional? ¿cómo reimaginamos la capacidad de que los comunales tengan agencia en lo local, con autonomía, dentro de los principios colectivamente definidos? Hacernos cargo de estos asuntos no es algo de un día para otro, pero es un desafío insalvable si queremos madurar como alternativa social y política.

¿Y crees que en el corto plazo exista una disposición dentro del FA que permita abrir estos temas?

Primero, creo que al FA le falta mucha más confianza y acuerdo político respecto al horizonte compartido que soñamos. Como paso número dos, creo que también nos falta afianzar una lectura compartida del Chile actual, en términos de un diagnóstico sociopolítico y, por tanto, la posterior fijación de una mirada estratégica respecto a ello. Tercero y último, me parece que también hay que poner sobre la mesa que democratizar espacios no es algo que uno deje de hacer en algún minuto, y esa voluntad de democratización debería ser una constante dentro del Frente Amplio. Creo que en la medida que fortalezcamos nuestras confianzas y la profundidad de nuestro acuerdo político, pasando de una alianza electoral a una alianza político-social, repensando y generando ese diagnóstico compartido de nivel estratégico, donde probablemente tengamos diferencias en las tácticas, aunque sí acuerdo en una estrategia común, tendremos elementos que permitirán dar ese salto de maduración. Pero si no nos atrevemos a hacer eso, en términos del cómo se hace política hacia adentro y hacia afuera, creo que el desafío se nos va a pasar de largo, porque no hay tanto tiempo.

rio político en Chile se reconfigura hoy, en los siguientes dos o tres años, con las siguientes rondas electorales. El cómo se hace política hoy en Chile está disputa desde ciclos previos al 2011, desde finales de la década de los noventa, desde las movilizaciones estudiantiles de 2001, 2006, por ejemplo, pero no va a estar en disputa tanto tiempo más. Y definitivamente dejará de estarlo si la ultraderecha irrumpe en el juego político, o en la medida que nos desborde la abstención y la legitimidad de las instituciones alcance niveles tan bajos que sean muy difíciles de corregir. Siento que tomar un camino u otro es una decisión que no siempre está abierta, no siempre se puede hacer, aunque hoy sí podemos hacerlo.

**RODRIGO MUNDACA**

FUENTE: radio.uchile.cl

“Hay una discusión estratégica que es clave: la reapropiación social de lo público que hoy nos es negado”

Recientemente premiado por la ciudad alemana de Nüremberg con el Premio Internacional de Derechos Humanos 2018 por su labor como secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca nos comparte su mirada sobre los conflictos ecoterritoriales y los desafíos democráticos que entraña la reapropiación social de las esferas públicas actualmente privatizadas. El también miembro del consejo de la Fundación Saberes Colectivos, conversa con *Cuadernos de Coyuntura* sobre el papel y proyecto que debiese caracterizar a una izquierda del siglo XXI.

En los últimos años ha habido focos —hablábamos de Quinteros, Camarones, Freirina— de movilización en torno a problemas que se les llama “ambientales”. ¿Cómo podríamos caracterizar de mejor forma los conflictos sociales que emergen en esos ámbitos? ¿Son el agua, la energía y el medio ambiente una piedra de tope cuando el ciclo económico chileno, basado en la exportación minera y agrícola intensiva, parece estar tocando techo?

Durante 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evacuó un informe sobre conflictos socioambientales en todo el país diciendo que hoy existen 116 conflictos socioambientales, siendo sin duda el más importante el que tiene que ver con el agua. Hay algunos teóricos que sostienen, y nosotros lo suscribimos, que hoy el 60% del PIB nacional depende del agua. Chile no sólo tiene privatizadas las fuentes de agua desde el año 1981, sino que también tiene privatizadas las empresas sanitarias desde 1971, cuando se inició el proceso de privatización de la gestión de las aguas. Por tanto, hoy el 98% de toda la provisión de agua en el país está en manos de transnacionales.

Por ello, en el origen de los conflictos ecoterritoriales en todo Chile, está el agua como centro neurálgico de la matriz productiva nacional. En Freirina, por ejemplo, se intentó instalar un plantel de cerdos de 500.000 cabezas y cada cerdo iba a consumir diariamente dos litros de agua, de modo que iba a poner en el centro de la discusión la provisión de agua a la comunidad. En Caimanes, la minera Los Pelambres, del grupo Luksic, emplazó el tranque de relave más grande de América Latina en el curso natural de las aguas del estero Pupío, contaminando esas aguas. En Petorca, el modelo de agronegocio simple y llanamente dejó sin agua los ríos: hoy no hay escurrimiento superficial de aguas en los ríos, el 60% de la población depende de camiones aljibes para su uso cotidiano y en situaciones de mucha algidez con respecto al conflicto, el pueblo pobre privado de agua aparece defecando en bolsas de plástico.

En el origen del conflicto en el Wallmapu está precisamente la industria forestal: el Decreto Ley forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974, permitió la enajenación de más de dos millones de hectáreas de asentamientos fundamentalmente mapuche, y

en el origen de ese conflicto está el agua, porque la industria forestal, particularmente los eucaliptos y los pinos, demandan enormes cantidades de agua. Estas especies degradan y erosionan suelos, contaminan las napas freáticas y, por tanto, lo que ha provocado el modelo forestal en el Wallmapu ha significado la destrucción del identitario-cultural y el identitario-territorial mapuche, así como el acorralamiento de las comunidades. Este modelo ha sido permitido y fraguado fundamentalmente con un aporte decidido del Estado, particularmente a favor de dos grandes grupos económicos, Matte y Angelini. En el conflicto con las hidroeléctricas, está ENEL, una empresa público-privada italiana, dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad.

Los conflictos ecoterritoriales que se han desplegado a lo largo de todo el territorio tienen como origen, sin duda, el tema de la privatización de las aguas, así como este modelo de desarrollo extractivista, que nosotros caracterizamos como “de despojo”. Es decir, en términos simples, en el país hay un “modelo de despojo” asociado a la apropiación de los bienes naturales comunes que ha comprometido la vida de las comunidades.

Esos conflictos han logrado poner sobre el tapete esta discusión, sobre todo a partir de las consecuencias más extremas referidas a la contaminación y a la privación de derechos humanos. Sin embargo, a parecer todavía tienen dificultades de proyección política para instalarse en un nivel que haga retroceder las causas fundantes de los conflictos, pues evidentemente la contraparte tiene mucha fuerza. ¿Qué perspectivas y desafíos ves para estos movimientos ecoterritoriales?

Creo que las bases de la desigualdad en Chile se encuentran íntimamente asociadas a la apropiación de los bienes naturales comunes. Cuando miras el origen de la fortuna de Eliodoro Matte, el origen de la fortuna de Angelini, el origen de la fortuna de Luksic, el origen de la fortuna de Pérez-Yoma, el origen de la fortuna de grupos connotados como las hermanas Solari u otros, encuentras la apropiación de los bienes naturales comunes, el agua y la tierra. En referencia a eso, ha habido una ausencia

absoluta de teorización respecto a los efectos que ha provocado sobre el territorio la apropiación de los bienes naturales comunes. Ha sido todo un proceso instalar en la discusión pública la importancia que tienen estos bienes para las comunidades, y la importancia que tienen como medios de acumulación de plusvalía para sus tenedores. En términos muy teóricos, hoy los bienes naturales comunes generan plusvalía para sus tenedores y, por tanto, si uno quisiera parafrasear la tesis del valor de Marx, dinero—mercancía—dinero incrementado, hoy sería recursos naturales—dinero incrementado, inmediatamente.

A la ecuación le falta un punto de partida...

Claro, porque en esta ecuación me apropio de los bienes naturales comunes, dado que existen dispositivos teórico-institucionales fraguados en dictadura que me permiten hacerlo, y comienzo a ganar dinero inmediatamente. Hay un componente de la ecuación que no está. Es loca —teóricamente— esta formulación, pero es real: el Estado entrega los derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes amparados en las garantías constitucionales se apropian del agua entregada en forma gratuita y perpetua por parte del Estado y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua.

Ha habido una ausencia de debate público en torno a este tema, invisibilizado por los medios de prensa Copesa, invisibilizado por un porcentaje importante de la casta política, que tiene intereses creados con ex parlamentarios, ex ministros que salen del Parlamento, salen del gabinete y asumen funciones de dirección en las sanitarias, en las AFP. Un ejemplo concreto es Rodrigo Weisner, encargado de la Dirección General de Aguas (DGA) durante el primer gobierno de Bachelet: sale del Gobierno y aparece como abogado asesor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) para el emplazamiento de una planta gigantesca en Paine que iba a dejar a toda la comuna sin agua. Rodrigo Weisner, cuando sale de la DGA, asume como abogado y testigo de Pérez Yoma en la causa que me siguieron y en la que terminé finalmente condenado por denunciarlo como ladrón de agua.

Entonces, todo este carrusel que ha habido entre el sector público y la empresa privada, donde funcionarios del Estado pasan

directamente a defender intereses corporativos de las empresas privadas asociados a los bienes naturales comunes, ha impedido que la casta política asuma en propiedad este debate. Y creo que nosotros, desde el punto de vista de los sectores populares, de los sectores democráticos, también nos ha faltado fuerza para instalar el tema. Hoy en día la suma de la evidencia ha instalado el asunto, pero no por capacidades propias, sino por la opinión pública internacional que sostiene que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión del agua, en el que se viola el derecho humano al agua. Ha sido un proceso de instalación lento, donde generalmente las comunidades que hemos estado en resistencia en los territorios hemos enfrentado poderes fácticos enormes, que han hecho gala de grandes bufetes de abogados para criminalizar, perseguir y censurar, y medios de prensa afines que han logrado invisibilizar estas batallas.

En términos más amplios, ¿cómo ves la relación entre la mercantilización y apropiación de los bienes comunes y el debilitamiento de la democracia?

Sin duda que la defensa de los dispositivos teórico-institucionales fraguados en dictadura, que permitieron la apropiación de los bienes naturales comunes, ha sido a ultranza. La lucha por la recuperación de estos bienes es una lucha política que impacta ecoterritorialmente a las comunidades, porque la solución es política. El desmontar, por ejemplo, el Código de Aguas de 1981 requiere de voluntad política en el Congreso; desmontar el 19-24 que consagra la propiedad privada del agua requiere de lo mismo; terminar con el Decreto Ley forestal 701 requiere iniciativa política. Y esta iniciativa en el Congreso no está presente porque se necesitan mayorías parlamentarias para derogar los dispositivos teórico-institucionales que mantienen plenamente vigentes esos principios.

Entonces, efectivamente, estos dispositivos institucionales que transformaron derechos sociales y bienes naturales comunes en privilegios y no en derechos, han sido férreamente defendidos por sectores fácticos de la sociedad chilena, debilitando profundamente la democracia. Y cuando digo esto me refiero a que, por ejemplo, hoy las comunidades no tienen ninguna

opinión con respecto a la administración, asignación y uso de las aguas, no tienen opinión con respecto a qué hacer sobre el ordenamiento territorial: hoy las mayorías pobres del país no participan de las grandes decisiones que tienen que ver con su territorio.

Nosotros planteamos que el gran problema que tenemos es uno político y de modelo: hay un modelo de explotación intensiva e irracional de bienes naturales comunes que destruye las comunidades e hipoteca la vida de aquellos que viven en territorios que son considerados “zonas de sacrificio”, donde se toma la decisión política de que hoy es mucho más importante producir energía, producir carbón, producir palta, que la vida de las comunidades. El modelo ha erosionado la democracia, la participación de las comunidades, ha debilitado las organizaciones sociales, pero también ha contado con un aliado insoslayable en este debate: el abuso de poder, que se grafica en nuestros territorios con el empleo de la fuerza física para facilitar la entrada de la industria extractiva en nuestros territorios, el uso de la fuerza física para censurar, criminalizar, golpear, asesinar a los luchadores socioambientales. El abuso de poder desde el discurso inferiorizante, como el que emplea el ministro de Agricultura actual, quien sostiene que los miembros de Modatima son “vendepatrias” o “desleales” con la sociedad chilena porque denunciaron la privación del agua en el exterior.

Creo que la industria extractiva y la casta política y empresarial han contado con todos estos dispositivos de abuso de poder en los territorios, y ahí no hemos sido lo suficientemente enérgicos para fracturar este modelo de despojo, pero también para denunciar con toda la energía que se requiere los abusos de poder que se cometen en los territorios.

Has mencionado la existencia de una serie de pilares establecidos en dictadura, pero también esto tiene una continuidad en los años noventa, incluso profundizándose en algunos ejes. ¿Cómo ves el papel de la Concertación en todo esto?

Tengo una opinión muy crítica sobre la Concertación a propósito de la profundización del neoliberalismo en Chile. El código de aguas fue fraguado en 1981 en plena dictadura, pero la privatización de las sanitarias comienza desde el año 1997 en

adelante. La educación por voucher, la privatización de la salud y de las pensiones, son todas ideas que, si bien es cierto fueron forjadas en dictadura, fueron perfeccionadas en los gobiernos de la Concertación. El carrusel de los funcionarios públicos que salen de la administración del Estado y pasan a las AFP, las sanitarias, las hidroeléctricas, las forestales, es un diseño fraguado y preparado por ellos. La Concertación es responsable directo del modelo de despojo que hoy existe sobre nuestro territorio. La alegría, cuando llegó, lo hizo a cambio de un proceso de desmovilización de la lucha social muy importante. Nos dijeron “váyanse a sus casas que nosotros vamos a resolver los problemas que ustedes tienen como sociedad”. Pero, en rigor, la solución fue una mayor concentración de la riqueza y de los bienes naturales comunes.

¿Cómo ves el ciclo político actual? ¿qué rol puede llegar a jugar un espacio como el Frente Amplio en una posible articulación virtuosa entre movimientos sociales y partidos políticos?

A pesar de que soy integrante activo del Frente Amplio, tengo una posición crítica respecto a nuestro período de instalación. A propósito de la elección presidencial y parlamentaria, el resultado obtenido nos pilló desprevenidos: nadie esperaba obtener veintiún parlamentarios, ni el más optimista de los analistas. Ese resultado pilló al Frente Amplio no coordinado, y lo que hemos visto durante este período 2018 en el ejercicio parlamentario, lo digo con mucha responsabilidad, ha sido un intento temerario de sustituir, desde el Parlamento, la lucha social que se libra en los territorios. Creo que esa es parte de la crítica y de la autocritica que tenemos que hacer. En algunas materias hemos dado un mal espectáculo, faltando unidad de criterio en varios temas, por ejemplo, en torno a la relación con América Latina y sus procesos emancipadores. Hoy día no son pocas las opiniones que hablan, por ejemplo, de Cuba o Venezuela como una dictadura.

Creo que no hemos tenido unidad de criterios en relación a temas que son tremendamente relevantes para un segmento importante del Frente Amplio y que tienen que ver fundamentalmente con la no injerencia, con la autodeterminación y con el

ejercicio de la soberanía popular. Me parece que son principios intransables, que estaban expresados en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, y que después no se hicieron carne durante el año 2018. Eso nos ha debilitado. Tampoco hemos logrado marcar agenda en temas que son importantes para la ciudadanía. En realidad, mayormente, hemos estado reaccionando a la agenda del Gobierno, pero no estamos hablando de qué queremos, de qué tipo de sociedad queremos construir. Es cierto, se verbaliza que queremos una sociedad de derechos, que no queremos una sociedad de privilegios, ¡es cierto! Pero ¿qué hacemos con los fondos previsionales de las y los trabajadores? ¿Terminamos con las administradoras de fondos de pensiones? ¿Qué queremos en materia de educación, en materia de salud, vivienda, de agua, de tierra?

También nos ha faltado coraje en algunos temas donde hemos preferido no pisar callos. Ejemplo de esto ha sido la absoluta falta de liderazgo respecto al tema de Venezuela. Tenemos a Piñera en Cúcuta entregando ayuda humanitaria, pero poniéndose a disposición del imperialismo, porque no hay que perderse en esto. Porque la historia de América Latina es la historia del despojo: desde el año 1492 en adelante, desde la llegada de los españoles a América. El interés que tiene el imperio en Venezuela tiene que ver principalmente con la apropiación de los bienes naturales comunes, particularmente el petróleo; la historia de América Latina es la historia de las intervenciones Yankees en Guatemala, en Chile, en Panamá.

Por otro lado, creo que este nuevo ciclo político no inventa la rueda. Probablemente esto no les guste a varios, pero me parece bastante ufano y pretencioso hablar de un nuevo ciclo político cuando la historia es un elemento fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. ¿Dónde fue fraguado el modelo de despojo?, ¿cuál ha sido el rol de los partidos políticos? Para no desconocer una historia larga de luchas sociales, prefiero decir que, en este nuevo ciclo político, es probable que etariamente haya nuevos actores en la vida política nacional, que irrumpen de escenarios que eran previsibles. ¿Cuáles son esos nuevos actores? Fundamentalmente actores que vienen del mundo estudiantil. Pero yo pregunto, ¿para abrir el deba-

te!, ¿hay algún dirigente social, un dirigente territorial hoy en el Parlamento, desde el Frente Amplio? Y no, no hay ningún dirigente territorial genuino que hoy esté en esa instancia. Entonces creo que hay un segmento de capas medias ilustradas, progresistas, que irrumpen en el Parlamento, y que intentan apropiarse de una manera algo ufana de la historia.

Y eso además potencia la dualidad de la que hablábamos respecto al “oye, yo desde la política vengo a solucionar tus problemas”.

En el fondo, esta idea de que son las nuevas generaciones las que deberían resolver los problemas centrales de la sociedad chilena, creo que hace caso omiso de la historia. Y la historia es un elemento indispensable para pensar el presente y proyectar el futuro. Hay una historia de lucha en la sociedad criolla, en los pueblos indígenas, que no se puede soslayar. Esa historia de lucha hoy día requiere ser recogida, puesta en valor, para adecuarla a un período distinto. La dialéctica de la naturaleza, de la sociedad humana y el pensamiento, hacen necesario hoy tener tácticas flexibles de lucha, pero sin obviar que el enemigo es común, que tiene que ver con un patrón de acumulación de bienes comunes y derechos sociales transformados en plusvalía para sostenedores. Por lo que el objetivo es claro. Es fracturar, terminar con este patrón de acumulación hoy, eso es lo central. Y esa discusión no está instalada, está soslayada. Ahora, si me preguntas si está soslayada a propósito, creo que hay sectores del Frente Amplio que la han soslayado porque es una discusión central, pero que puede erosionar sus bases de apoyo.

Estos temas que planteas, como el problema ecológico y de los bienes naturales comunes, tensionan los paradigmas más clásicos de la izquierda. ¿De qué manera estos elementos se insertan en un proyecto de izquierda para el siglo XXI? ¿qué elementos pondrías tú en ese horizonte estratégico para afirmar en positivo lo que estamos buscando?

A ver, no lo quiero hacer autorreferencial, pero vivo en una “zona de sacrificio”, en la provincia de Petorca. En este tiempo, en que hemos hecho resistencia en nuestro territorio logramos teorizar, pensar, sobre las bases de la desigualdad, y sin duda los conflictos ecoterritoriales han dado cuenta de la necesidad

de terminar con las bases de la desigualdad. Y eso pasa necesariamente por recuperar los bienes naturales comunes. No hablamos de “nacionalizar”, hablamos de “recuperar” el agua, la tierra, los servicios ecológicos que nos brinda la biodiversidad. Hablamos de la reconstrucción de nuevos modelos de desarrollo que pongan en el centro de la discusión la reapropiación social de lo público. Ahí hay una discusión que es tremendamente importante, es una tesis en la que venimos pensando mucho porque, ¿cómo nos reapropiamos socialmente de aquello público que hoy día nos es negado?

Incluso hoy hay formas privadas de apropiarse de lo público, toda esta idea del privado con “sentido” público...

Exacto, por eso lo que yo quisiera plantear es otra cosa: es la reapropiación social de lo público. ¿Cómo nos reapropiamos hoy en día de las sanitarias?, ¿cómo nos reapropiamos de los fondos previsionales de los trabajadores, para el pueblo pobre y sencillo? Creo que ahí hay una discusión estratégica que es clave: discutir sobre la reapropiación social de lo público que hoy día nos es negado. Porque existen dispositivos que negaron lo público y lo transformaron en objeto de plusvalía, de ganancias, para sus sostenedores privados. Ahí hay un horizonte estratégico en el que deberíamos trabajar.

Me gusta esa idea que planteaste del “horizonte estratégico”, pero también me pone en una discusión que era planteada por el Che Guevara al diferenciar táctica de estrategia: planteaba que la táctica era el modo práctico de conseguir los objetivos estratégicos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el objetivo estratégico de la izquierda hoy en día que no sea luchar por la felicidad de las y los trabajadores? ¿Puede haber otro objetivo para nosotros que no sea recuperar la felicidad de la gente? Recuperar los derechos sociales, recuperar los bienes naturales comunes: ese objetivo estratégico sigue estando en el horizonte. Hoy en día están mucho más vívidas que antes las frases de Allende, cuando dice: “Y mucho más temprano que tarde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Esas palabras siguen estando muy vivas en nosotros.

Por eso, creo que nuestro horizonte estratégico sigue estando en el espíritu de un montón de luchas territoriales que hoy se

libran, y tiene que ver con restituir la dignidad y la felicidad del pueblo sencillo. A nosotros nos hiere el alma cuando en los territorios nuestros niños, nuestros hijos, nos dicen “tengo doce años y no conozco lo que es un río”, cuando dicen que si hoy hubiera agua en los ríos no tendrían que pagar por ir a una piscina. O cuando no se logra comprender la dimensión ecológica que tiene la privación de agua en las comunidades y cómo eso destruye las poblaciones bióticas, no bióticas, el identitario cultural. O sea, en todo orden, no solamente la privación de bienes comunes sino también de derechos sociales.

Porque aquí hay un tema que lo planteo también con un ánimo de polemizar: ¿nos hemos puesto a pensar si la sociedad actual, el pueblo sencillo, quiere ser representado? ¿El pueblo sencillo quiere que lo representen o quiere protagonizar su propio destino? Yo creo que es lo segundo. Nos pasa muchas veces que llegan a los territorios personajes que dicen “no se preocupen, yo los voy a organizar”, lo cual es lo más desafortunado que se puede plantear. El horizonte estratégico de protagonizar nuestro propio destino, de luchar por la felicidad, de luchar por el ejercicio de la soberanía popular, que pasa por recuperar la participación ciudadana, por deliberar, por fracturar el modelo de despojo actual.

Nosotros no nos conformamos con meramente aggiornar este modelo y lo hemos dicho muchas veces, nosotros lo que queremos es fracturar el modelo de despojo, y creo que en el centro de esa posibilidad de fractura está la discusión sobre la reapropiación social de lo público. Probablemente suene como un concepto muy abstracto, pero creo que es una idea sobre la cual hay que priorizar.



CYNTHIA SHUFFER

Investigadora

Fotógrafa Feminista

Integrante del Colectivo

Rufián Revista





KAMAU

KAMAU



CYNTHIA SHUFFER



CUADERNOS DE COYUNTURA

Número 23

Publicación bimestral | abril 2019

Fundación Nodo XXI

Santiago | Chile

www.nodoxxi.cl

Presidente Fundación Nodo XXI

Carlos Ruiz Encina

Directores Fundación Nodo XXI

Francisco Arellano

Camila Miranda

Víctor Orellana

Giorgio Boccardo

Daniela López

Director Cuadernos de Coyuntura

Sebastián Caviedes

Editores Cuadernos de Coyuntura

Felipe Ruiz

Pierina Ferretti

Diseño

Priscilla Muñoz



Suscripción y contacto
suscripciones@nodoxxi.cl



www.nodoxxi.cl

Suscríbete a los CUADERNOS DE COYUNTURA



Nuestra fundación no tiene vinculación con los grandes poderes económicos del país y es independiente del sistema de partidos políticos actuales. Estamos comprometidos con la creación de nuevos puntos de vista, que ayuden a comprender y transformar la realidad, así como a avanzar hacia una sociedad de derechos plenamente democrática. Queremos continuar en esa senda de autonomía y para ello las suscripciones constituyen un gran aporte. Te invitamos a ayudarnos a continuar con nuestro trabajo.

MODALIDAD DE VENTA	VALOR	DETALLE
Venta simple	\$5.000	Venta unitaria, sin envío.
Suscripción semestral	\$25.000	3 números correlativos, incluye envío a domicilio. 1 ejemplar por edición.
Suscripción anual simple	\$35.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 1 ejemplar por edición.
Suscripción anual doble*	\$50.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 2 ejemplares por edición.
Suscripción anual triple	\$60.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 3 ejemplares por edición.

*La suscripción anual doble o triple, está pensada para suscripciones institucionales: organizaciones sociales, centros culturales, partidos políticos, medios de comunicación, etc.

¿Te interesa suscribirte?

Si tienes dudas o consultas, por favor escríbenos a suscripciones@nodoxxi.cl o contacta directamente a **Felipe Ruiz**, Encargado de Extensión de la revista al teléfono **+569 77928179**.

